

Orietta Favaro
Graciela Iuorno*

SUJETOS, POLÍTICA Y CONFLICTOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA

LOS AÑOS OCHENTA en América Latina se caracterizaron por un fuerte endeudamiento externo, la crisis de la deuda de 1982 y sus continuas negociaciones, conjunto de cuestiones que colocaron a la región en condiciones de aplicar los postulados del Consenso de Washington. Para el caso de Argentina, se introdujeron modificaciones a la estructura económica con la resistencia de los trabajadores que tenían fuerza sindical y política. Estos actores ejercían presión sobre el Estado y las empresas, limitando la capacidad de hacer rentables las inversiones; la crisis no sólo era política, se extendía al ámbito social y económico, donde el bloque de poder inducía una redistribución regresiva del ingreso acompañada de una constante inflación (Gambina y Campione, 2002: 36-37). La crisis hiperinflacionaria de 1989-1990, similar a la de 2001-2002, se inscribe en el marco de las crisis mundiales por imponer un modelo de acumulación con predominio de la valorización financiera, y expuso el conflicto entre las fracciones de la clase dominante para definir el nuevo régimen de acumulación y apropiarse del excedente, movilizándolo recursos de poder para que el Estado instrumentara medi-

* Docentes e investigadoras de la Universidad Nacional del Comahue y del Centro de Estudios Históricos de Estado, Política y Cultura, miembros de CLACSO. Neuquén, Argentina.

das económicas que favorecieran a una u otra fracción. Las condiciones internacionales permitieron el triunfo de la fracción burguesa a favor de las políticas neoliberales (entre otras, apertura del mercado, ajuste fiscal y privatizaciones). La resolución de la crisis se concretó en la esfera gubernamental en un proyecto que se inició con dictaduras en América Latina, países donde se ensayaron políticas luego dominantes en los estados centrales. En Argentina, la dictadura de 1976, que se propuso desarticular el intervencionismo económico y restablecer la libertad de mercado, había triunfado con la adhesión de empresarios y dirigentes de los principales partidos, y dejó como herencia una fuerte crisis estatal y un deterioro en la sociedad, la política y la cultura. Luego del desorden de la transición, Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical (UCR), en 1983, se presentaba como un garante del orden y fundador de una nueva era. Con la promesa de la democracia se conmovió a la ciudadanía, harta de vivir en la incertidumbre y la improvisación de los sucesivos gobiernos, y “aunque el proceso legaba un Estado destruido, entregaba la posta también de un mito estatal que probaba ser capaz de sobrevivir al agotamiento de recursos que antaño parecieran inagotables” (Novaro y Palermo, 2003: 543-544).

En este contexto de la historia reciente argentina, el objetivo central de este artículo es plantear consideraciones y caracterizaciones sobre las protestas, cortes de ruta, puebladas y conflictos de los sujetos sociales involucrados en áreas subnacionales poseedoras de recursos (entre otros, los hidrocarburos) frente a las privatizaciones de los años noventa. Asimismo, analizar las acciones colectivas más importantes de los empleados públicos provinciales en el marco del ajuste fiscal de dicha década. Nos interesa efectuar una aproximación a los casos en las provincias patagónicas (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego¹) por dos razones fundamentales.

En primer lugar, porque la historiografía nacional destinó vastos espacios y las editoriales privilegiaron los estudios de científicos sociales cuyos trabajos tienen como área de análisis, en general, la pampa húmeda y el litoral argentino. Sin poner en duda su científicidad y seriedad académica, una deficiencia importante de la que adolecen esas prácticas historiográficas es el exiguo tratamiento destinado a los análisis sobre las provincias argentinas, en este caso particular, las de la Patagonia.

En segundo término, porque las políticas neoliberales aplicadas en Argentina a partir de los noventa dieron lugar, por una parte, a movilización, resistencias y huelgas de los empleados públicos en las pro-

¹ La región patagónica, con Tierra del Fuego incluida, representa el 35% de la superficie del país, el 7% de la población y el 7% del PBI.

vincias patagónicas afectados por la reforma del Estado y el ajuste fiscal y, por otra, a la privatización de las principales empresas estatales que explotaban recursos fundamentales, lo que provocó protestas, cortes de rutas, puebladas y la emergencia de un sujeto nuevo: *el piquetero*. Se trata de un sujeto social que se instaló como actor político en la escena nacional y cuya metodología de acción, con especificidades propias, se reprodujo en otras localidades poseedoras de recursos mineros, así como en algunas ciudades del conurbano bonaerense, ligadas a los cambios en los sectores populares producto del proceso de desindustrialización que se desplegó en el país desde los años setenta.

VOCES CONVERGENTES, RESULTADOS DIVERGENTES EN LOS NUEVOS ESPACIOS

Es necesario recordar que los espacios de estudios fueron territorios nacionales entre 1884 y 1955, año en que se convirtieron en nuevas provincias argentinas. Nos referimos, entre otras, a Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Tierra del Fuego se provincializó recientemente, en 1991. La denominada “Revolución Libertadora” que derrocó a Perón pospuso la efectiva institucionalización de los nuevos estados hasta 1958, año en que eligieron por primera vez a sus gobernadores.

El Estado nacional tuvo un papel predominante, no sólo por la relación de dependencia en la que mantuvo a estas áreas, en las que designó a las autoridades por más de setenta años, sino también porque explotaba prioritariamente sus recursos, entre otros, el petróleo y el carbón, a través de empresas como Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera (HIPASAM). Desde su conformación, las nuevas provincias tuvieron una fuerte vinculación con el poder central y reprodujeron en su interior administraciones centralizadas y economías estatizadas, ya que la mayoría de ellas dependen, aún hoy, de las regalías que ingresan por concepto de exportación de sus recursos. Los casos de Río Negro y Tierra del Fuego muestran algunos matices diferenciadores –fruticultura y turismo–, aunque la línea planteada resulta la generalidad en el espacio patagónico.

La presencia de la instancia federal en la década del setenta también fue importante en la creación de parques industriales, promoción industrial, regional y sectorial, con tasas de subsidios y beneficios otorgados por los regímenes, que indujeron la radicación de ramas industriales e incentivaron su instalación y la creación de establecimientos de reparación, descentralizándose rubros de la economía (y del conflicto). Con la incorporación del capital multinacional se modificó la configuración territorial, impulsando el crecimiento de determinadas provincias o regiones, mientras otras se rezagaban considerablemen-

te. Las economías regionales sufrieron la falta de crédito, las elevadas tasas de interés y los vaivenes macroeconómicos y, si bien los procesos de industrialización y modernización llegaron al área patagónica, la velocidad del crecimiento fue inferior a la zona del litoral y dispar en el interior de las propias provincias de referencia. En este orden, la empresa pública tuvo un papel notable como motor de desarrollo a través de la inversión estatal y, aunque con características heterogéneas, mostró niveles de eficiencia y calidad en las prestaciones de servicios. Siempre afectadas por la crisis política y la discontinuidad de su conducción, fueron organismos que en más de una oportunidad se utilizaron como instrumentos de política económica; por ejemplo, para aumentar la recaudación general del Estado.

La dictadura de 1976 tuvo un proyecto basado en el diagnóstico de la crisis que hicieran los militares con anterioridad al golpe y una concepción sobre la vía para solucionarla. Se trataba de una crisis crónica –según las fuerzas armadas– enraizada en un modo perverso de relación con la sociedad y el Estado; los militares negaban la política y trataron de eliminar toda forma de disenso. En esta circunstancia, cada espacio con partidos provinciales y nacionales no fue ajeno a esa “modernización desde arriba para ejercer una dominación social conservadora” fundada en las políticas liberales del ministro José Alfredo Martínez de Hoz (Sidicaro, 2004: 92). La privatización de la vida política que hizo el régimen autoritario no impidió los “sótanos del poder”, es decir, que la política se llevara tras bambalinas y se convirtiera en un escenario vedado y velado donde se decidieron prácticas de catacumbas, nuevos sujetos sociales –invirtiendo representaciones– que fueron convocados subrepticamente a estos verdaderos tinglados subterráneos, sucedáneos de las arenas políticas tradicionalmente expuestas a la luz pública (Oszlak, 1984: 39).

La privatización de la sociedad no derivó en la desaparición de la política, sino en la transformación de sus prácticas. Varias cuestiones, entre ellas la guerra de Malvinas (1982), que para los patagónicos tiene un enorme significado, pusieron fin a los cuarteles de invierno. Dicho conflicto armado había sido la última estrategia de la dictadura para prolongar la dominación militar. La guerra contra un enemigo externo, que llevó a una sociedad a quedar prisionera de su lógica, fracasó y el desorden total del régimen, sumado a la situación económica y social, creó una crisis generalizada. La descomposición castrense alentó a los actores políticos con aspiraciones a una refundación democrática que no implicaba la reedición de anteriores transiciones; por ello, las fuerzas políticas se reunieron en la Multipartidaria (organización que agrupaba a todos los partidos políticos) para desarrollar una estrategia moderada y de negociación con el régimen en retirada; sin un poder

civil estructurado y totalmente movilizado, pero pudiendo actuar como canal de expresión de grupos de interés de la sociedad. Muchos de los que votaron a Alfonsín tenían como objetivo derrotar a la dictadura, y cerrar de esta manera un ciclo. Pero los problemas continuaron, aunque las autoridades democráticas tenían el camino para crear el orden utilizando la fuerza legítima; en la región ya a mediados de los ochenta se produjeron acciones colectivas que movilizaron distintos recursos y oportunidades políticas. Las demandas sociales tempranamente fueron expresadas de forma pública por sindicatos y organizaciones sociales-económicas; hubo rebeliones populares que operaron con rasgos definidos de localización y singularidad, por ejemplo, entre otras, la huelga de hambre de los obreros de la construcción (UOCRA) neuquinos en 1984 (Carrario y Campos, 1996: 30-31), las huelgas de los docentes rionegrinos (UNTER) en 1987, los *tractorazos* de los productores valletanos² en los años setenta, la pueblada de Las Lajas (Neuquén) en 1987, la rebelión popular de Catriel (Río Negro) en 1987.

PROTESTAS, RESISTENCIAS Y CONFLICTOS EN LOS NOVENTA

Las protestas y resistencias de los sujetos sociales en la Argentina de los noventa, frente a la política estatal de ajuste fiscal y privatización de empresas públicas, condicionadas por las secuelas de la dictadura militar, provocaron alteración en la direccionalidad peronista del movimiento obrero. Por un lado, estaban vigentes los efectos del régimen con su correlato de víctimas de la represión de origen popular y, por otro, la descomposición de la dominancia peronista en el movimiento obrero, en un proceso que se aceleró durante el gobierno de Carlos Menem.

La desindustrialización que se llevó a cabo desde la dictadura y posteriormente la reforma del Estado provocaron severas consecuencias tanto en la instancia central como en la sociedad. Disminuir la intervención estatal en la economía fue una consigna clave, que afectó servicios y preparó el camino para la privatización posterior al generalizar la idea sobre la ineficacia del intervencionismo en áreas de servicio. Las medidas económicas, políticas y sociales produjeron cambios en el mundo del trabajo, que disminuyeron los asalariados y el salario real; se incrementaron los trabajadores autónomos con deterioro del sistema previsional y las obras sociales bajo control de los sindicatos (Lobato y Suriano, 2003: 115-121). Pocos años después, Menem no sólo llevó adelante una ruptura con la tradición peronista, sino que también, con ciertas ambigüedades inicialmente pero con decisión después, asumió como propio el programa neoliberal. La apertura de la economía, la desregulación y la privatización

² Esta modalidad de protesta se produjo sobre la Ruta Nacional 22, también en los años ochenta y en los noventa.

de las empresas públicas se convirtieron en el eje de la etapa inicial que incluyó la hiperinflación de 1990 (Sidicaro, 2005: 41-43), lo que dio lugar a acciones colectivas, que en parte son procesadas por el sistema político en su dimensión nacional y provincial. Si bien lideró la protesta en los primeros años de los noventa, al sindicalismo (la CGT Azopardo con Ubaldini y la CTA) que reunía los reclamos de docentes y de empleados estatales y de salud en las provincias no le fue posible armar una estrategia global frente al modelo económico que se imponía. La reestructuración de la administración pública afectó a los empleados estatales porque perdían sus empleos, tenían problemas con el cobro de sus salarios y se producía el congelamiento de la carrera administrativa. A su vez se daba la privatización acelerada de las empresas del Estado, a veces sin grandes movilizaciones de protestas, excepto pocos casos, y sin apoyo de los sindicatos, que en su mayoría ingresaron en el proceso de negociación con el gobierno, transformando la economía. Sus resultados provocaron la constitución de sujetos y organizaciones, aunque sin demasiada articulación, que tomaron la forma y dinámica propias de una resistencia característica de las transformaciones operadas en el régimen de acumulación que emergía, y los trabajadores asumieron la diversidad frente a lo nuevo, tanto territorial como sindical (Gambina y Campione, 2002: 173-178). Fueron expresiones signadas por la inorganicidad, que se mostraron a través de diferente configuración, con la desarticulación del activo militante organizado por los sindicatos, grupos y partidos políticos. El sujeto de la protesta, en tiempos del disciplinamiento social y sindical, llevó a que la mayoría de las acciones tuvieran como objetivo reivindicaciones inmediatas, y pocas orientadas a modificar las políticas del gobierno.

Las protestas contaron como punto de partida con la desarticulación de la sociedad del trabajo y el retiro del Estado como garante y promotor del bienestar, y se dieron en localidades patagónicas –origen de las acciones colectivas– donde el peso de la población en su relación con el Estado provincial o con la actividad industrial *era y es* muy importante. En algunas oportunidades alcanzaron un pico de intensidad en relación con la crisis, en la participación y en los métodos utilizados, que las convirtieron en un conflicto social con una variedad de protagonistas, y se creó una oportunidad política, en una unidad de intenciones, sentimientos y emociones con intereses que se elaboraron en el escenario de las situaciones específicas. El conflicto, excepto en las fábricas recuperadas (Aiziczon, 2005: 175-204), salió del lugar del trabajo y se entrelazó con la pobreza, la precariedad y la desocupación. Es que la tradicional relación del sindicalismo con el peronismo puso en entredicho el monopolio sindical de la representación; por ello se apeló a otra organización que incorporó desde sus inicios a los desocupados. La intensidad de una crisis puede provocar violencia sobre el orden social

y político y depende de la percepción que tengan los protagonistas de la misma; el conflicto brinda certidumbre a los adversarios, lo que afirma la identidad en disputa por algo definido (Farinetti, 2003: 60-75).

LA SOCIEDAD PATAGÓNICA ENTRE EL AJUSTE Y LA PRIVATIZACIÓN LA REFORMA DEL ESTADO Y EL AJUSTE FISCAL

A pesar de que históricamente el diseño institucional argentino caracterizó al Estado federal como centralista, el grado de centralización se incrementó en los años noventa. Suponía una mayor concentración en la toma de decisiones en el nivel nacional y una pérdida relativa de peso de las provincias; por ello, los estados vieron restringida su capacidad de gestión y la gobernabilidad jaqueada por la aplicación de políticas de ajuste. Estas fueron generadas desde la instancia nacional y no tenían en cuenta la especificidad de cada caso local, lo que provocó niveles de conflictividad social que no pudieron ser procesados por el gobierno al carecer de margen de maniobra debido a su dependencia financiera. Las crisis adquirieron dimensiones diferentes en cada una de las provincias. Sin embargo, en la mayoría se aplicó una serie de medidas estandarizadas que redefinieron la relación Nación-provincias. No tuvieron características estrictamente financieras, sino que respondieron a un estilo de gestión que predominó, al subsidio a sectores económicos regionales de baja productividad pero con capacidad de presión política, a los regímenes de promoción industrial sin instancias de real control y evaluación del impacto, a la transformación de los bancos locales en cajas chicas de la administración pública, a la apelación del empleo como política social, a la escasa presión tributaria; todos los factores mencionados, entre otras cuestiones, constituyeron distintas facetas del mismo problema: la ausencia de una estrategia de desarrollo provincial, más allá de la conflictiva relación con el poder central y la responsabilidad que le cabe al Estado nacional (Escandell, 1997: 124-126).

Esta situación es aplicable con mayor intensidad a las provincias patagónicas, porque el Estado estuvo presente en su conformación, en la de su sociedad y en la determinación de los recursos cuya explotación, a través de la presencia de las empresas estatales, definió sus economías. Por ello consideramos pertinente comparar las protestas y movilizaciones en los casos de estudio. Recordemos que la irrupción de la rebelión popular denominada el *Santiagoñazo* marcó un hito determinante del ciclo ascendente de la protesta social –en el interior del país– caracterizado por la naturaleza “universal” de las acciones colectivas con relación a los motivos, es decir, la deuda salarial en varias provincias, y además contra la corrupción en otras (Farinetti, 2005: 228).

En Río Negro, la expansión del Estado provincial desde el advenimiento de la democracia fue significativa; a las tradicionales políticas

públicas de fomento y apoyo, en los noventa se le sumó la prestación de servicios considerados estratégicos aumentando el nivel de deuda pública en disonancia con la direccionalidad impuesta desde el orden nacional: “Río Negro es la única provincia que no registra ninguna clase de avances en el proceso de privatizaciones” (*Río Negro*, 1995). El resultado electoral nacional –Menem reelecto presidente– no pasó desapercibido en la provincia; por un lado porque Masaccessi, su gobernador, fue el candidato por el radicalismo y, por otro, porque finalizó una manera de concebir la gestión pública y la instancia local con una estructura providencialista (Villca, 2004: 97). La transición en el gobierno provincial exacerbó los conflictos internos del partido gobernante y, a principios de 1995, la plaza financiera se retrajo, y se abrió una nueva etapa para las finanzas públicas rionegrinas. Coincidiendo con el clivaje nacional que significó el año 1995, la ocupación del Consejo Provincial de Educación por los docentes marcó el inicio una etapa de violencia con el desalojo compulsivo de los ocupantes del edificio por el grupo especial de la policía provincial (BORA). En este sentido, el accionar sindical de los empleados y docentes provinciales puede analizarse en dos momentos diferenciados; no obstante, existe en todo el proceso una constante: la red sindical continuó siendo el espacio de sociabilidad por excelencia y el gremio predominante, los estatales Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) –dado que no existe un desarrollo industrial significativo–, fue más proclive a la negociación que a la confrontación con el gobierno.

A comienzos de 1995, los sindicatos movilizaron un abanico de formatos de protesta, como el corte de calles, ocupación de edificios públicos, concentración de trabajadores en las plazas, radios abiertas, movilizaciones y retención de servicios, que daban cuenta de la diversidad del repertorio y de la unidad de sentidos, frente al atraso en el pago de los salarios.

Las discusiones e intereses de los diferentes actores socioeconómicos rionegrinos se articularon con las multisectoriales. Esta forma de organización se multiplicó en Argentina en el período que se inició con los hechos de diciembre de 2001; sin embargo, las demandas sociales urgentes –los remates de propiedades, el retraso en el pago de salarios, etc.– originaron la emergencia de multisectoriales no sólo en Río Negro, sino también en Chubut, La Pampa, Santa Fe y otras provincias del litoral. También surgieron frente a situaciones de crisis política. Semejantes a las asambleas populares, se instituyeron como frentes amplios movilizándolo a los sectores medios y creando condiciones para relacionar a los trabajadores con los productores primarios, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios y los referentes de la iglesia. Por lo tanto, en su interior se produjo una lucha política intensa entre una posición que limitaba el programa de acción con estrategias negociadoras y otra que apuntaba a una participación hegemónica de los trabajadores dentro de este frente único.

La Multisectorial rionegrina organizada a partir de comisiones internas, sindicatos de base, organizaciones de desocupados y jubilados (estos últimos actuaban por medio de coordinadoras) se diluyó tempranamente, y fracasó por las rupturas entre las organizaciones sindicales.

Desde el régimen político provincial (1983), se buscó consolidar una sociedad cimentada en los valores de la convivencia y el pluralismo político; para ello se reformó la Constitución (1988), se propuso el traslado de la Capital Federal a Viedma (Díaz Honorio, 1989: 84-96) y se planteó la descentralización de la administración pública con organismos en diferentes regiones de la provincia. No obstante los discursos, las prácticas condujeron a la acumulación política y la ocupación del aparato del Estado que, a su vez, era colonizado por el partido radical y penetrado por los actores empresariales y corporativos (Alfani et al., 2000:10). El cambio de signo político partidario en la Nación empujó al gobierno y al partido provincial al establecimiento de acuerdos con el ala política –apoyando la reforma de la Constitución Nacional que permitía la reelección de Menem–, mientras se confrontaba con el Ministerio de Economía. En 1991, la aplicación de la Ley de Convertibilidad limitó las posibilidades de mantener la política de expansión del gasto, lo que desembocó en la firma del Pacto Fiscal (1993). La crisis del fisco local se manifestó en toda su magnitud con la situación mundial originada por el “tequila” mexicano, por su dependencia de los créditos bancarios –situación muy distinta a la de las restantes provincias patagónicas; asimismo la falta de adecuación a los imperativos del sistema y la ausencia de auxilios desde la instancia central llevaron al gobierno a la cesación de pagos, deterioró la gobernabilidad en la provincia. Los ingresos de Río Negro provienen de los impuestos provinciales y de aportes nacionales como la coparticipación federal y regalías por electricidad y petróleo. Sin embargo, no es una provincia petrolera, ya que tiene diez veces menos ingresos que Neuquén en ese rubro.

Las diversas acciones de protesta desarrolladas por los empleados públicos durante varios meses (1995) provocaron la intervención de la Gendarmería Nacional. Superando el clásico aislamiento sectorial, los congresos extraordinarios de estatales en diferentes localidades de Río Negro fueron los escenarios en la toma de decisiones para la lucha, como también lo fueron las acciones en oposición a la implementación de los bonos estatales (Cedepre) con los que se pagaban los salarios a los empleados públicos.

Esta primera etapa (1991-1995) estuvo signada por las crisis financieras y la política de creación de empresas públicas de servicios estratégicos, sin rentabilidad, pero con propósitos clientelísticos y prebendarios (Favaro e Iuorno, 2005: 41-65). Establecer el pacto institucional de gobernabilidad con el principal gremio de los estatales (UPCN) acompañó el proceso de reforma administrativa, implicó la pérdida de estabilidad de los empleados

estatales y el disciplinamiento de la administración pública, es decir, erosionó las bases para la instalación del modelo neoliberal en la provincia. El peso del ajuste se descargó sobre los agentes del Estado, a los que se les redujo su salario, pagándoles con bonos. La construcción del nuevo pacto institucional tuvo como instrumento la Mesa de Reconversión, integrada por un amplio arco de instituciones políticas, sindicales y sociales. Dicho espacio permitió legitimar la dirección de las políticas públicas. Del abanico de actores socioeconómicos, el frutícola fue el más beneficiado aunque el más endeudado; la privatización del banco provincial viabilizó la creación del Banco Residual de Río Negro³, al cual transfirieron sus pasivos, alejando a los grandes productores de la amenaza de remates, quiebras y liquidaciones. El problema salarial, eje de las acciones colectivas organizadas por los gremios que plantearon un mayor grado de unidad en la acción, contó con el apoyo de otros sectores de la sociedad rionegrina.

Durante la segunda etapa (1995-1999), que corresponde a la asunción del nuevo gobierno, el nudo del conflicto pasó por la defensa de la Caja de Previsión Social, y la oposición de los gremios a su transferencia a la Nación. De este modo, se generó la emergencia de dos líneas sindicales, que condujeron a la ruptura interna del Frente Estatales Rionegrino (FER), de reciente conformación. La primera, representada por la UPCN, adhirió a la posición oficial, mientras que las asociaciones que conformaban la CTA se opusieron a la misma y presentaron un proyecto para la permanencia de la Caja en la provincia. A través de un congreso educativo, elaboraron una propuesta, y lograron que no se aplicaran los cambios en el marco de la Ley Federal de Educación (LFE-1993) (Gómez, 1995: 5). Los intersticios del poder funcionaron; no se produjo la renuncia del gobernador ni la intervención federal y el sistema político local continuó en su modo de operar, con capacidad para llevar adelante la legitimidad del partido gobernante; los opositores al gobierno (PJ) no pudieron instalar en la agenda de la opinión pública el problema de la corrupción política, sin que se dimensionaran conceptos, enfoques, expresiones, como coordinadas de la situación que se pretendía destacar. El fin de la convertibilidad y la devaluación de la moneda crearon una arena favorable para la economía y las finanzas por el ingreso de las exportaciones, el mayor nivel de la actividad turística, de los servicios a la producción y la recuperación de la construcción (Landriscini, 2004: 265). Sin embargo, en la geometría variable de la ciudadanía aún no se atenuó la inequidad, la fragmentación social y regional en el territorio.

En Neuquén, por acción del Estado nacional y del Estado local, se constituyó una sociedad demandante con un gobierno que no duda en utilizar

3 La provincia aprueba tardíamente la privatización y concesión de Empresa de Energía de Río Negro (EDERSA), Dirección Provincial del Agua (DPA), Servicios Aéreos Patagónicos (SAPSE), Puerto de San Antonio (SAE) y Servicios Ferroviarios Patagónicos (SEFEPa).

políticamente las necesidades de la ciudadanía para consolidar un modelo de poder. Su continuidad determinó la creación de una estrategia de crecimiento fundado en la expansión de sectores extractivos y financieros cuya renta quedó fuera de la región, a lo que debe sumarse el estancamiento sufrido por las actividades vinculadas a la producción y PyME agroindustriales. Desde los años setenta, una positiva tasa de migración como consecuencia de la actividad hidrocarburífera en la región determinó un crecimiento económico no muy ordenado y sin que el Estado provincial tuviera un proyecto de desarrollo regional. El modelo extractivo presentó síntomas de agotamiento en los noventa, y la privatización de YPF marcó el punto de inflexión.

Luego de la primera pueblada en Neuquén (1996), la segunda, en 1997, vino de la mano del conflicto docente. En efecto, dentro de las reformas neoliberales, recordemos la aprobación de la LFE y la Ley de Educación Superior (LES-1995), legislación hacia la cual la sociedad local fue refractaria. La provincia mostraba signos de la crisis de las políticas de bienestar y colocaba al gobierno de Felipe Sapag (en su quinto mandato) en la disyuntiva de ensayar políticas de ajuste.

Marzo de 1997 se inició con una huelga docente en el marco de un conflicto entre el sindicato que agrupa a estos trabajadores, la Asociación de Trabajadores Docentes Neuquinos (ATEN), y la instancia política local⁴. El sindicato docente venía en huelga desde tiempo atrás, no sólo porque se oponía a las reducciones salariales (zona desfavorable), sino porque estas eran simultáneas con la reforma educativa; la situación se extendió a toda la provincia, en alianza con la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER). Los docentes neuquinos salieron a la calle cuestionando y rechazando el proyecto educativo que el gobierno quería implementar. Así, huelgas, reuniones, marchas, movilizaciones, con el apoyo de padres y alumnos –quienes renovaron su apoyo– permitieron crear el clima del conflicto⁵, que adquirió ribetes impensados cuando se solidarizó y se unió con la lucha de la población cutralquense por los efectos de la privatización de YPF.

La huelga de los trabajadores de la educación en Neuquén se inició como lucha sectorial, y adquirió un carácter masivo que sumó a la comunidad educativa y a otros sectores sociales, mostrando a nivel nacional que se podía combatir desde los sindicatos. La lucha, en el contexto de las

4 ATEN forma parte de la CTA. Nació en los últimos años del gobierno de la dictadura de 1976. En 1997, el sindicato tenía 8 mil afiliados, más de la mitad de los trabajadores de la educación de la provincia, y predominaban los afiliados de la capital neuquina. La CTA, que agrupa a sindicatos estatales, se caracteriza por su oposición política al Movimiento Popular Neuquino (MPN).

5 Conflicto que se potenció por sus componentes políticos, ya que no sólo rechazó la aplicación de la LFE sino que también solicitó reivindicaciones de tipo económicas (puestos laborales, salario, etcétera).

medidas de ajuste del gobierno provincial, exigía la derogación de la LFE y transitó más hacia confrontación que hacia la conciliación (tendencia esta última que sustentaba la mayoría de las conducciones sindicales del país y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina –CTERA), combinando métodos nuevos como las asambleas de base en las que imperaba un fuerte protagonismo de los docentes en la toma de decisiones. La huelga duró 35 días y, a pesar de las medidas coactivas, adquirió contundencia cuando el pueblo cutralquense decidió cortar la Ruta Nacional 22 para apoyar esta reivindicación de ATEN.

A raíz de la segunda pueblada (1997), la protesta se amplió a toda la provincia –se instaló en la escena nacional–, dando lugar a una situación particular, insurreccional, que frenó la aplicación de la LFE; se recuperaron los puestos de trabajo y se mantuvieron los derechos laborales. No obstante, las diferencias ideológicas internas dentro de ATEN –que se observaron en las últimas asambleas⁶– permitieron aceptar las condiciones propuestas por el gobierno local con el compromiso de continuar la lucha por Cutral Co en el marco de la CTA. La nueva situación, que dentro del sindicato provocó una profunda fractura –aún sin saldarse– no sólo debilitó al gremio docente que abandonó a los habitantes de esas localidades, quienes sufrieron la represión de la Gendarmería y la muerte de Teresa Rodríguez. Asimismo, derivó en una constante acusación de traidores por parte de cada uno de los intervinientes en este doble conflicto: al interior de los docentes-al interior de los piqueteros y fogoneros de las localidades petroleras (Petruccelli, 2005: 125-162). A pesar de que en las localidades petroleras se pidió –sin éxito– la renuncia del gobernador, se destituyó al intendente, y el MPN perdió las elecciones en esa localidad desde las puebladas. Cutral Co es una de las pocas ciudades neuquinas donde no gobierna el partido local. La respuesta al conflicto es política; la sociedad cutralquense –donde por años residió la familia Sapag y se conformó el MPN– le quitó representatividad al partido local⁷.

Pocos años después, en abril de 2006 –mostrando su recuperación de la derrota de 2003–, nuevamente el conflicto docente cubrió la escena local. La demanda de salario e infraestructura en las escuelas para iniciar las clases llevó al gremio a una huelga, con cortes de rutas y asambleas en

6 Una de las dirigentes más importantes en ATEN era Marta Maffei, quien luego pasó a la CTERA y en la actualidad es legisladora por el ARI. Es necesario recordar que la CTERA levantó la consigna de derogación de la LFE.

7 Recordemos que, luego de las protestas en los enclaves petroleros, se crean en 1996 los Planes Trabajar (PT), diseñados por el Ministerio de Trabajo y los economistas del Banco Mundial, que cofinanció el programa durante el primer año. Los PT funcionaron hasta 2001 y eran distribuidos a las provincias, cuyos gobernadores decidían a qué municipios se les giraban los fondos; por lo tanto, el clientelismo del PJ y de la UCR, según donde fuera, se presenta en la asignación de los recursos.

las áreas de acceso a la explotación de zonas productoras de petróleo. “El reclamo docente tuvo un sesgo demasiado sectorial y no se politizó a fondo; el puente –esta vez– quedó demasiado lejos; la capital fue traicionada por el interior, los piquetes fueron más visibles y eficaces que la huelga misma” (Lizárraga, 2006: 7).

Al comienzo, en el contexto de las internas del partido local, los obreros petroleros apoyaron la demanda de los docentes que, promovidos por las seccionales del interior y dando otro cariz al conflicto, habían cortado el circuito productivo petrolífero. El prolongado conflicto (más de treinta días) y la presión del gobierno llevaron a sus militantes a levantar los piquetes en un enfrentamiento entre obreros petroleros y docentes. Los medios nacionales reflejaron tardíamente los sucesos –posiblemente continuaban vigentes los hechos en Las Heras– y contrariamente a la huelga de 1997, que había contado con el apoyo de la sociedad neuquina, este conflicto –al quedar circunscripto a lo sectorial, unido a la debilidad de la dirigencia que fluctuaba entre llegar a un arreglo y continuar con el conflicto– se resolvió provisoriamente con un incremento salarial que no atendía a las demandas del sector.

Neuquén tiene un gobernador ausente. El hombre que ha sido elegido para ocupar el Poder Ejecutivo está mucho tiempo afuera de la provincia y se desvela más por su candidatura presidencial que por administrar los asuntos del Estado provincial. Coherentemente con este esquema, le preocupa más su imagen en el escenario nacional que la solución misma de los problemas neuquinos (*Río Negro*, 2006a).

En Chubut, la “Revolución Argentina” puso en marcha proyectos de promoción industrial que permitieron la creación de organismos de planificación, similares al de Neuquén (Copade) y de Río Negro (Dirección de Planeamiento). En este orden se crearon, por una parte, el Consejo de Planeamiento y Acción para el Desarrollo (COPLADE) y, por otra, la Corporación de Fomento de la provincia (CORFO-Chubut), que coordinaba las actividades económicas. Se definieron tres polos de desarrollo, vinculados a los principales centros poblacionales: Norte (con epicentro en Trelew), Sur (Comodoro Rivadavia) y Oeste (Esquel-Trevelin), en los que se instalaron parques industriales con actividades clave diferentes y complementarias: textiles, aluminio y pesca, respectivamente. El proceso industrializador, con mayor impacto en la provincia entre 1973 y 1985, permitió la creación de puestos de trabajo industrial directo, con una importante inversión y tecnología, y se incrementó de modo significativo el PBI. Ello provocó crecimiento poblacional, constituido por la fuerte inmigración extraprovincial, la urbanización (alcanzaba su techo la ganadería), la polarización poblacional y la transformación

de la estructura económica local. El punto de inflexión lo constituyó la década del ochenta, en un efecto arrastre producto de las políticas de la dictadura para todas las áreas del país que, sumado al impacto de las políticas de los noventa, llevó también a la desindustrialización y reconversión de la economía local.

En efecto, los factores que impulsaron el crecimiento de Chubut –la promoción industrial, las obras públicas y la expansión del empleo estatal– quedaron fuera de escena⁸. Así la desocupación creció, se hizo el ajuste y se implementó la apertura económica⁹ (Ibarra, 2000: 1-24). La desestatización de los años noventa produjo un fuerte impacto en la población que, desocupada, buscó alternativas como la autoorganización empresarial, el ingreso en la administración pública, la creación de microemprendimientos y cooperativas de trabajo, etc.; es decir, una multiplicidad de actividades y nuevos agentes económicos que no ocultaban el conflicto producto de la privatización. Se puso fin a la presencia estatal en su doble papel de impulsor del desarrollo en un área productiva –en el contexto de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI)– y garante de la integración territorial.

Antes de la privatización de YPF (1991), el conflicto social estalló en varios núcleos urbanos de esa provincia, en particular en Comodoro Rivadavia. El ajuste fiscal recayó fundamentalmente en los empleados públicos del Estado y servicios, y el atraso en el pago de los salarios llevó a acciones individuales y colectivas. En este caso, nuevamente los docentes son motorizadores del *Chubutazo* (octubre de 1990), que provocó la renuncia del gobernador Néstor Perl, con juicio político de por medio. En este conflicto tuvieron un papel destacado los trabajadores del sector público, que en numerosas asambleas tomaron decisiones con la presencia de dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), de la Asociación Trabajadores de la Educación Chubutense (ATECH) y con la participación de dirigentes de los partidos opositores –UCR, Partido Autónomo Chubutense (PACH) y Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)–, quienes se solidarizaron con el reclamo. El justicialismo no logró resolver la crisis agravada por las fracturas internas. Los requerimientos y movilizaciones intensificaron el conflicto frente a la soledad del gobernador, que ni siquiera recibió el apoyo del gobierno nacional, al que había adherido. Los diferentes sectores participantes desarrollaron acciones conjuntas a partir de intereses contrapuestos: los docentes, los padres, el sector público y de servicios. Pero además, igual que en Río Negro, es dable destacar la labor ejercida por las comisiones multisectoriales, conformadas por la representación de dis-

8 El empleo público, que había crecido en un 85% desde 1983-1989, se redujo un 10% entre 1990 y 1991.

9 La desocupación pasó del 4,8% en 1987 al 13,9% en 1992.

tintos sectores socioeconómicos de la comunidad chubutense (entre ellos estudiantes secundarios y universitarios), los barrios, organismos e instituciones de la comunidad. No obstante, estas comisiones fracasaron, pues contradictoriamente estuvieron presentes en ellas la unidad y la desarticulación. Y no sólo en la Multisectorial, por razones políticas o ideológicas; también merece subrayarse el caso del sindicato de los petroleros (SUPE) que, a pesar de las concesiones de las áreas del recurso y la privatización de la empresa, no colaboró en la percepción de la crisis, de modo que las indemnizaciones a los empleados de la compañía estatal que se plegaron al retiro voluntario provocaron, tiempo después, un importante número de desocupados (Comodoro Rivadavia tuvo en 1993 el mayor índice de desocupados del país).

El Estado, en alianza con las fracciones burguesas que pretendían la recomposición del capital, presionó para la liberalización y precarización de las condiciones de trabajo, con una fuerte restricción de la capacidad negociadora del sindicalismo que ya no tenía el papel de contención social del pasado, a lo que debe agregarse la sutura que proporciona la ideología de la resignación, el individualismo y el miedo. Los diarios chubutenses mostraron la movilización con sus matices; uno de ellos decía al respecto:

Para analizar la movilización de la antevíspera que pretendió ser un “chubutazo” pero resultó un “chubutín”, [se debe] separar primeramente la paja del trigo, por cuanto una cosa es el malestar estrictamente local (sueldos no abonados, hospitales desabastecidos, enseñanza paralizada, una pésima conducción de gobierno, una corrupción generalizada, etc.) y otra es la crítica que puede hacerse a la política económica nacional y el plan de ajuste exigido por Menem. La “rabia” volcada a la calle, hace una semana, se debió exclusivamente a una condena popular por el manejo irresponsable del gobierno del doctor Perl, quien malgastó los recursos chubutenses en nombramientos, certificados superonerosos de la obra pública y otros gastos superfluos, arribando a un estado de crisis financiera de tal magnitud que, por primera vez en muchísimo tiempo en la provincia, se dejó de abonar en término los haberes a los empleados públicos, a la clase pasiva y a los proveedores del Estado (*El Oeste*, 1990).

Respecto de Santa Cruz, es también un enclave económico de empresas estatales (YPF, YCF y Gas del Estado), con escasa industrialización y mayoría de población empleada en servicios derivados de estas actividades, construcción y comercio. Hacia los años ochenta, la explotación de los recursos –carbón y petróleo– se constituyó en el núcleo del desarrollo económico provincial y principal fuente de empleo, aportando el

70% de las regalías al presupuesto local. En esta provincia, la crisis de las regalías de 1987 por los precios internacionales del petróleo afectó el pago de los salarios. En un principio la instancia local intentó absorber la crisis, pero en mayo de 1990 –en una situación semejante a la experimentada en Chubut– se produjo una importante movilización, protesta y huelga de los estatales por los salarios atrasados. Participaron varios sectores y gremios, la administración pública, los docentes, los municipales y los judiciales; hechos que condujeron al derrocamiento del gobernador. Este había intentado frenar el conflicto con un aumento salarial imposible de efectivizar que sólo intensificó la protesta –reprimida fuertemente– y complicó la situación política, lo que llevó al acuartelamiento de la policía en función de la quita de apoyo por parte del Ejecutivo. El juicio político al gobernador fue promovido por la propia fuerza gobernante (el PJ) debido a la división intrapartidaria expresada, por un lado, por el representante ganadero de la zona sur y futuro presidente del justicialismo local, quien lideraba el Movimiento Renovador Peronista (MRP), y por otro, por Néstor Kirchner –intendente de Río Gallegos entre 1983-1989–, creador del Frente para la Victoria Santacruceña (FVS)¹⁰. En la interna peronista nacional de 1989, disputada entre Antonio Cafiero y Carlos Menem, el MRP se había inclinado por este último y el Frente kirchnerista, por Cafiero (Luque et al., 2003: 98-141). Tras las elecciones que permitieron llegar al gobierno a Menem, el gobierno provincial no encontró en él el apoyo suficiente para sortear la crisis interna. Los poderes políticos se hicieron ingobernables frente a la situación económica social y el gobernador fue destituido en junio de 1990. En este escenario, los intereses de sectores sociales locales y económicos permeabilizaron lo político, y las diferencias se expresaron en el interior del justicialismo, fuerza política dominante en la provincia (Gatti, 2003: 27-40).

Por último, en Tierra del Fuego –única zona franca del país–, la creación de áreas industriales, dotadas de la infraestructura y los servicios comunes necesarios, estimulada por políticas de promoción industrial regional y sectorial, hoy está fuertemente cuestionada, y se pone en duda su continuidad; no obstante, existe un sector de la administración política nacional que pretende su ampliación y robustecimiento. Recordemos que, como consecuencia de la expansión de la década del noventa, se establecieron alrededor de 150 aglomeraciones industriales localizadas, mayoritariamente, en provincias con trayectorias industriales breves como San Luis, La Rioja, Chubut, Entre Ríos y la provincia que nos ocupa. Sin embargo, contrariamente a lo previsto, gran parte de las

¹⁰ Igual denominación recibió el frente que se articuló para las elecciones legislativas de 2005.

aglomeraciones presentaban bajo nivel de ocupación; mayoritariamente eran establecimientos medianos, vinculados a la inadecuación de la política de promoción para la instalación de pequeñas plantas. A fines de 2005, el gobierno nacional definió la suerte de los proyectos de radicación de nuevas industrias electrónicas (28 en total), para contrarrestar la producción proveniente de Brasil (Kantor, 2004: 3).

Tierra del Fuego, tradicionalmente con escasa población, mayoritariamente inmigrante (73%), concentrada en dos polos (Ushuaia y Río Grande), tiene como actividad económica el turismo, la industria textil, la petroquímica y la electrónica. De tener 13.527 pobladores en 1970, pasó a 101.187 en 2001, vale decir que se septuplicó luego de tres décadas de zona franca. La promoción del espacio fueguino creció al calor de la legislación emitida por los tramos finales del gobierno militar del general Alejandro Lanusse (1972) –aunque se puso en práctica años después– y con la creación, por razones estratégicas, de un polo electrónico en el contexto de una concepción militar-estatal de impulsar la radicación de empresas con la exención de casi todos los impuestos (aunque las industrias se convirtieron en ensambladoras de piezas importadas con arancel cero, provenientes de Japón y Corea).

En este espacio convertido en provincia en 1991, las políticas neoliberales implementadas desde el gobierno nacional no fueron aplicadas –en general– por el primer gobernador, dado que la prioridad a comienzos de los noventa era la organización institucional de este nuevo estado argentino.

PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES

En la Patagonia, los recursos mineros e hidrocarburíferos dieron lugar a una modalidad de ocupación del territorio que no se circunscribió a la explotación de los mismos, sino que abarcaba una red de equipamientos sociales, culturales, recreacionales y residenciales para el personal permanente. Implicaba una estrategia de desarrollo urbano y regional que excedía lo que una empresa realizaba en función de maximizar sus ganancias, es decir que YPF, YCF y otras compañías subsidiaban el lugar donde se asentaban. Esta intervención permitió el crecimiento de una amplia gama de actividades comerciales y de servicios, pero sin concretar una diversificación productiva. Por ello, constituyeron históricamente economías de enclave, destinadas a extraer petróleo, gas o hierro (Rofman, 1999: 95).

En este orden de cosas, recordemos que tradicionalmente en Argentina la explotación petrolera y carbonífera se concentró en dos empresas estatales: YPF e YCF. Su sola presencia en el mercado incluía una acción social que dejaba de lado cualquier cálculo tradicional de rentabilidad empresarial. Los cambios producidos desde 1991 conlle-

varon impactos sociales muy profundos en las áreas de estudio, ya que la extracción y explotación de los recursos en el sur argentino constituyeron un factor estratégico para el desarrollo integral de la zona de influencia de la actividad. A diferencia de los procesos agroindustriales, la explotación de los recursos trajo repercusiones intra-regionales, ya que se remiten importantes volúmenes a los centros nacionales de consumo, industrialización o exportación, sin modificaciones del producto en área de extracción; la región sólo “recupera” parte por el mecanismo de la regalía (Rofman, 1999: 94-96).

La denominada Reforma del Estado en la década del noventa supuso, entre otras cuestiones, la desregulación del mercado, el predominio del capital financiero, la recomposición de la tasa de ganancias de los grupos económicos nacionales, extranjeros y los bancos, siendo el ajuste y el proceso de privatización de las empresas estatales sus aspectos más conocidos. Sin embargo, para que esto ocurriera, desde mediados de los años setenta, con la política de la dictadura de 1976, la política laboral de las empresas estatales en general y de YPF en particular fue de “reestructuración”, hecho que se consolidó en los noventa.

En Neuquén la protesta y movilización de la población cutralquense se produjeron en 1996 y 1997, cinco años después de concretar la venta de la empresa estatal, en un espacio donde se mantuvo la industria y su sujeto social: el obrero petrolero. Recordemos que la primera pueblada –contundente y masiva en su apogeo, como frágil y desamparada en el momento de las definiciones– fue provocada por el reclamo de los vecinos cutralquenses, que solicitaban la instalación de una industria que para generar puestos de trabajo en lugar de la privatizada YPF. El gobernador Felipe Sapag anuló el contrato con la empresa canadiense Agrium que instalaría una planta de fertilizantes en las ex localidades petroleras (Cutral Co y Plaza Huincol)¹¹, argumentando la imposibilidad de concretar la inversión estatal comprometida y que acompañaría a la privada. La decisión se dio en el contexto de la lucha facciosa en el interior del partido gobernante, el MPN, hegemónico en el sistema político neuquino. Este hecho fue el detonante de varios años de incertidumbre y fatigas de los pobladores de las localidades de referencia, que tuvieron como expresión las puebladas del 20 al 26 de junio de 1996, con barricadas encendidas, corte de ruta, pueblada y *piqueteros*. Este nuevo actor –el *piquetero*–, cuyo origen se encuentra en las puebladas cutralquenses, estaba lejos de cualquier planteo ideológico,

11 Plaza Huincol era el campamento-población de YPF creado en 1918, año del descubrimiento del petróleo en Neuquén; y Cutral Co, una localidad creada en 1933, como producto del asentamiento de obreros que trabajaban en YPF o en empresas privadas cercanas a la compañía estatal.

no le interesaba el poder y descreía de las dirigencias políticas y gremiales. Si bien reconocía haber votado por alguno de los partidos políticos –provincial o nacional–, tenía una imagen particular de la política. Los piqueteros pedían ser incluidos y reclamaban fuentes de trabajo con compromisos –de parte del Estado provincial y/o la privatizada YPF– a corto, mediano y largo plazo.

En el área neuquina, la empresa YPF provocó más de 4 mil desocupados sobre una población que no excedía los 50 mil habitantes entre los dos poblados de estudio¹². Los ex ypefianos no tuvieron asesoramiento –nacional o provincial– para sus “inversiones” en microemprendimientos locales, que fracasaron en la mayoría de los casos; pero además, los trabajadores fueron abandonados en los momentos centrales de la privatización por el sindicato (SUPE), que negoció durante el proceso, lo que acentuó la desprotección y fragmentación de los mismos (Svampa y Pereyra, 2003: 108).

Si bien hubo promesas a los habitantes por parte del gobierno local, la protesta de los cutralquenses se plasmó en un conflicto. En la medida en que avanzaba, los protagonistas afirmaban su identidad al adquirir mayor percepción de la crisis y observar la fisura en el orden político. Aunque en este caso la estrategia terminó escurriéndose, los procesos compartidos y las decisiones colectivas permitieron aunar los esfuerzos, pasando de la inorganicidad a la organicidad territorial. Con el hecho de tornar visibles sus reclamos, se pasó a encontrar un lugar donde reunir esos reclamos: el corte de la Ruta Nacional 22, para que fuera visibilizado el conflicto que permitió la aparición de la asamblea y la democracia directa, sin enlaces con los sindicatos ni los políticos. No se desconocía al gobierno, aunque sí a las mediaciones políticas, lo cual hizo que los sujetos del conflicto se sentaran a negociar con aquel, de igual a igual, a partir de la relación de fuerza alcanzada por el corte de ruta y la asamblea. La movilización concretada por la población cutralquense arrastró a la propia dirigencia política, ya que los mismos intendentes de las dos localidades debieron adherir a la convocatoria.

Es necesario recordar que el abandono de la comunidad ypefiana estuvo oscurecido por un tiempo; por un lado, por los retiros, las licencias, las indemnizaciones, la posibilidad de convertirse en “empresarios” a partir de la creación de PyMEs con contratos de servicios con YPF que, entre otras cuestiones, congelaba el estallido de las puebladas. Por otro lado, por el lento desmantelamiento de la estructura social de la empresa y la tarea de contención hacia los trabajadores –y por exten-

12 En 1990, la empresa YPF contó con aproximadamente 50 mil empleados; luego de la reestructuración, que incluyó “retiros voluntarios” y despidos, pasó a tener 5.600.

sión hacia todo el pueblo– que llevaba a cabo YPF, empresa que ofrecía la principal fuente de trabajo. Era una situación caracterizada por la garantía laboral y de jubilación que se derrumbó.

Toda la vida comunitaria gira en torno a la empresa, que controla el hospital, los servicios, el club, provee de elementos básicos, otorga subsidios familiares y bonificaciones, buenos salarios [...] ascenso social, cobertura de salud y acceso a la vivienda, proveedurías, cines, instalaciones deportivas de todo tipo, incluyendo estadios y equipos de fútbol por barrios (Klachko, 2005: 42).

La justicia federal declaró su incompetencia frente a las puebladas y la decisión de reprimir continuó con la llegada de la Gendarmería, mientras el reclamo al gobernador Sapag se hacía más contundente. La pueblada mostró su fuerza y la necesidad de concretar un acuerdo que terminara con el conflicto; por ello, la demanda de “reparación histórica” continuó vigente y el corte se levantó frente a los compromisos que se firmaron y la fuerte política asistencial que se llevó a cabo por parte del gobierno provincial y municipal.

La segunda pueblada vino de la mano del conflicto docente en abril de 1997 –al que nos referimos con anterioridad– no sólo en apoyo a los educadores sino también por el incumplimiento de las promesas del gobierno local, y se operó el surgimiento de un efímero actor: el fogonero cuestionador del piquetero, a quien acusó de traicionar la esencia de la pueblada y acordar con el MPN (Favaro et al., 1997: 14-27). Este conflicto culminó con la muerte de Teresa Rodríguez, producto del enfrentamiento entre gendarmes, policías y pobladores. La situación descripta, más la marcha que convocó a toda la comunidad de la capital neuquina, determinaron el retiro de las fuerzas de seguridad. Es importante resaltar que los desocupados por la privatización de YPF en Neuquén, cuyo accionar se reprodujo rápidamente en Tartagal-Mosconi (Salta), no tuvieron un papel importante en las futuras movilizaciones, puebladas o cortes de ruta. Las razones son múltiples y complejas (¿Los motivos los afectaron menos? ¿Lograron puestos de trabajo en otros lugares? ¿Sobrevivieron con las PyMEs? ¿O fueron ayudados por el Estado provincial?). Es que se desarrolló una política de cooptación por el gobierno emepenista, que se colocó al frente de la pueblada, recordando su tradicional lucha contra el “centralismo” que había perjudicado los intereses de la provincia. Asimismo, el gobierno local tuvo un accionar importante luego de las puebladas; algunos dirigentes gestionaron beneficios para los protagonistas –incluyendo la propia petrolera, que intervino ofreciendo planes sociales– y se puso en

marcha El Mangrullo¹³, entre otras medidas, como *reparación histórica* para las comunidades petroleras. Por el tipo de emprendimientos, el programa de Sapag de *volver a la tierra*, a través del Proyecto 2020 –primera propuesta completa de planificación y reconversión económica en Neuquén–, fructificó en esta área hidrocarburífera por excelencia (Favaro et al., 2000: 37-48).

No olvidemos que, poco después de la segunda pueblada neuquina, se dieron piquetes y puebladas en las localidades petroleras salteñas –en el marco de una crisis general de las provincias del norte argentino– que duraron varios días, produjeron adhesiones de diferentes sectores y organizaciones sociales, con la conformación de una multisectorial que operaba en la definición de un actor político firme por sus acciones posteriores (se desarrollaron organizaciones de desocupados, en las que tuvo que ver la experiencia de la protesta en Neuquén) (Svampa y Pereyra, 2003: 125-126).

Para Río Negro, el petróleo no fue ni es el recurso central de su economía, pero la explotación asciende en algunas áreas con nuevos descubrimientos y explotaciones, entre ellas el área colindante a Catriel –que forma parte de la denominada cuenca neuquina– con presencia importante de empresas privadas. En este sentido, entre 1977-1980, esa área con reservas identificadas se entregó –mayoritariamente por contrato– al capital privado. Recordemos que en 1959 se inició la construcción del oleoducto Catriel-El Medanita, por medio del cual el recurso iba al litoral-pampa húmeda¹⁴.

Con la privatización de YPF, la inestabilidad del asentamiento poblacional –la población provenía de otras provincias y localidades– provocó la migración hacia otros lugares donde se explotaba el recurso¹⁵. En este escenario, el retiro de la empresa estatal fue gradual y, para

13 El Mangrullo es un yacimiento gasífero importante que fue entregado a los municipios de las dos localidades del conflicto para su explotación y beneficio. Se creó un ente (ENIM) para la licitación de la exploración y explotación, que adjudicó el yacimiento a una empresa privada, la petrolera brasileña Petrobras (2003). La reconversión productiva no se produjo aún; lo que se obtiene en concepto de explotación del yacimiento se destina a financiar capacitación, préstamos solidarios y nuevas PyMEs. Prácticamente no hay reconversión productiva, sino que las pequeñas empresas están destinadas a la fabricación de productos agropecuarios.

14 Los yacimientos de mayor producción en el territorio provincial son: Señal Picada (YPF), Entre Lomas (Pérez Companc), Barranca de los Loros (YPF), El Medanita (YPF), Medanita SU-25 de Mayo (Pérez Companc-Bridas), estas últimas, áreas colindantes con la provincia de La Pampa que en su conjunto aportan el 71% del total de la producción petrolera rionegrina.

15 El origen de los trabajadores petroleros en Catriel puede clasificarse por rubros: perforadores catamarqueños, inyectores santiagueños, ingenieros mendocinos, geólogos corobeses y platenses. El lugar tiene mucha importancia hasta los años ochenta, porque luego no se hallaron nuevos yacimientos (R.G., geólogo, testimonio oral, junio de 2005).

los años noventa, YPF tenía pocas explotaciones, y operaba sólo en un yacimiento (Señal Picada).

Con el nuevo contexto, el gobierno provincial, con el apoyo de la Nación, lanzó propuestas alternativas vinculadas al riego, con el objetivo de concretar el desarrollo agropecuario en una zona que buscaba una salida económica que sustituyera progresivamente la explotación petrolera. La situación provocó escasos conflictos en esa área¹⁶; de todos modos, Catriel no logró articularse en la matriz productiva del departamento en el que se encuentra incorporado administrativamente y fracasaron la mayoría de los microemprendimientos¹⁷. A fines de los años ochenta, se produjeron cortes de rutas y de puente; no obstante, las razones por las cuales se movilizó la población catrilense fueron diversas. Por una parte, hubo acciones colectivas motivadas por problemas limítrofes con el ejido colindante y, por otra, influyó la inequitativa distribución de las regalías del gobierno provincial al municipio de Catriel. Actualmente el gobierno efectúa inversiones en canales de riego para colocar en producción un número significativo de tierras que a largo plazo modificarían la economía de enclave local, se orientan al perfil productivo del Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El desarrollo de una economía alternativa para Catriel es un viejo proyecto que naufragó a lo largo del tiempo, y aún hoy, luego de cuatro décadas de explotación petrolera, no hay salida económica diferente que involucre ni más ni menos que el futuro de la comunidad (*Río Negro*, 2003).

Es que el precio del petróleo y lo que recibe el municipio en concepto de regalías no modificaron –por ahora– la economía de este enclave petrolero rionegrino.

Comodoro Rivadavia (Chubut) era (y es) la ciudad más importante dentro del área de la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ), ya que allí se asentaron la administración, servicios y comercio vinculados al petróleo, además de ser la de mayor concentración de habitantes e importante en términos económicos y productivos. La petrolera estatal actuaba sobre el resto de las actividades, y era su eje dinamizador; por ello, cuando se puso en marcha el

¹⁶ Antes de 1959, Catriel contaba con 537 habitantes; en 1970 ascendió a 5.322 y en 1990 alcanzó los 18.500. Hoy la población oscila alrededor de los 12.300 habitantes.

¹⁷ En varias oportunidades se discutieron a nivel provincial y nacional proyectos de riego, agrícolas y ganaderos, con la finalidad de encontrar una alternativa económica al petróleo en Catriel. Incluso se evaluó la posibilidad de ampliar la frontera agropecuaria nacional y que el área se constituyera en parte de un corredor comercial y turístico con Chile, a través del paso Pichachén, en el departamento de Ñorquín, en el norte neuquino.

programa privatizador, impactó en la región con una fuerte contracción en el mercado laboral, que provocó desocupación y subocupación. La Administración Comodoro Rivadavia de YPF redujo su planta de personal de 4.983 trabajadores (en 1990) a 518 (en 1993) (Von Storch, 2002: 73), y la población ocupada de Comodoro Rivadavia pasó de un 22,8% (en 1991) a un 1,9 (en 1993), datos demostrativos del significado de esta actividad en la ocupación. Ahora bien, esta ciudad llegó a ser el centro urbano con menor crecimiento relativo en la década del noventa, si se toman en conjunto las localidades más importantes¹⁸, a lo que debe anexarse la disminución de los volúmenes de producción petróleo de YPF y la rigidez del sector que contrae la oferta de puestos de trabajo¹⁹. En esta localidad, impactó con intensidad la crisis generada por las reformas de los noventa, dando lugar al más alto índice de desocupación de la Patagonia, con el 50% de la población económicamente activa (PEA) que se encontraba sin trabajo. Esto se relacionó con la política respecto de YPF en el contexto de la privatización, ya que –como se sabe– la actividad petrolera es inductiva de otras actividades, por lo que cualquier modificación en la modalidad empresarial supone efectos determinantes en el área. La brusca reducción de personal en las empresas, en general, que trabajaban en el Complejo San Jorge (norte de Santa Cruz y sur de Chubut) provocó contracción no sólo en otras actividades como la construcción, comercio e industria manufacturera, sino en la totalidad de la economía provincial. De este modo, las mujeres emergieron como las que “trabajaban”, y se ubicaron en la franja de subocupadas con horario reducido, en servicios personales y comercios minoristas. Si bien el Estado local creó instituciones para ofertar empleo, fue el Estado nacional el que puso en marcha los PT en 1996, luego de las protestas, precisamente, en los enclaves petroleros neuquino y salteño.

Desde 1994 se produjo en la zona una creciente precarización laboral, que afectó las firmas industriales que abastecían a la petrolera por la reducción de la demanda de bienes de capital, igual que el comercio y los servicios, sectores de ocupación de mano de obra importantes y dinámicos, y surgió con fuerza la tercerización con un sobredimensionamiento de la estructura. Esta situación intensificó la proporción de población ubicada en la administración pública, operando, por una parte, como amortiguador de la contracción laboral (desempleo encubierto) y, por otra, en aumento del clientelismo político. Pero además,

18 Comodoro Rivadavia creció el 28,8%; Trelew, el 48,1%; y Puerto Madryn, el 119,2%.

19 Es la época del Plan Houston y Petroplán.

como en el resto de las áreas petroleras, en la de la CGSJ²⁰, el impacto de la privatización sobre las representaciones sociales fue muy grande. Un Estado dentro de otro Estado, que expresa un modelo de bienestar como sistema de organización interno jerárquico, y marca –la petrolera– su impronta en la vida cotidiana y las relaciones sociales de los habitantes del sur (Von Storch, 2002: 83).

El fracaso de las alternativas que se desarrollaron con la privatización también acelera en esta área el regreso de ex agentes ypefianos a sus provincias de origen, y las ciudades pasan de ser receptoras a registrarse como lugares de éxodo de población.

En este orden, las protestas en Santa Cruz se produjeron con un débil papel de la oposición frente a la crisis de 1990. El conflicto social se aceleró en la medida en que la interna política se trasladó a la sociedad y simultáneamente a que en esa provincia se daba una fuerte defensa de YPF y de los trabajadores por parte del SUPE. Se anexa a ello la tarea de los mineros de Río Turbio por la privatización de YCF, de modo que se unió la protesta de unos y de otros, con acciones concretas como la toma de la mina. El estado local –gobernado por Kirchner (1991)– intentó hacerse cargo de empleos y financiamiento de los microemprendimientos producto de la fluidez de dinero con la venta de los activos públicos.

Desde 1994, el yacimiento de propiedad estatal-provincial se mantuvo bajo administración y gerenciamiento privados en la forma de una sociedad anónima –Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT)– conformada entre un *holding* del empresario Tasselli y otro de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLYF). En el mismo año, una movilización popular y numerosas asambleas, en las que los trabajadores denunciaron el caos en la empresa y el claro objetivo del concesionario de vaciarla, condujeron al corte de la Ruta 40 en Río Turbio y, años más tarde, la situación de la cuenca minera llevó a que se repitiera la experiencia de 1994. El avance del concesionario sobre los salarios de los trabajadores, las condiciones laborales, el deterioro de la explotación de la mina y los contratos precarios derivaron en la toma de la empresa y en movilizaciones en Río Turbio y Río Gallegos. Si bien el conflicto fue el más intenso desde el inicio de la concesión, sólo se destrabó a partir del acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación, entre la empresa (YCRT) y ATE, y se convirtió –por sus resultados– en un fracaso para los trabajadores. En 1999 se conformó una agrupación que propuso el control obrero de la empresa estatal, y

20 Es necesario señalar que muchos operarios petroleros radicados con sus familias en Comodoro Rivadavia se desplazaban (y se desplazan) diariamente desde esa ciudad hacia los yacimientos y empresas en la cuenca de referencia, en Santa Cruz.

que provocó la confrontación entre dos sectores sindicales: la lista verde que respondía a Víctor De Genaro y la lista negra, que se definió como “clasista, por la democracia y anticapitalista”. Estas posiciones emergieron en el contexto de la inflexión nacional de 2001, situación que, sumada a las deudas de salarios y a despidos de obreros contratados, originó la convocatoria a una asamblea comunitaria que movilizó a la población y puso fin a la concesión, regresando la empresa a producir bajo control estatal. Había preocupación en los trabajadores cuando se discutió la perspectiva de fijar el rumbo de la mina, discusión que contó con el aporte de organizaciones invitadas con sus propuestas técnico-productivas y posiciones políticas.

En síntesis, la cuenca San Jorge es una subregión dentro de la Patagonia que tiene concentración poblacional en las zonas urbanas, población escasa en las otras áreas, y una sociedad de constitución reciente debido a que sus habitantes tienen diversas procedencias: extranjeros europeos y de países limítrofes. La actividad económica predominante es de signo extractivo primario exportador al área pampeana, tiene puestos de embarque y se desarrollan actividades –en concomitancia con la actividad petrolera central en la región– en localidades tales como Comodoro Rivadavia (1907), Cañadón Seco (1944), Caleta Olivia (1960), Pico Truncado y Las Heras (1993)²¹. Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue el agente productivo que sostuvo la actividad y dinamizó la zona (Cicciari, 1997: 195). Recordemos que, en los noventa, en el contexto de una importante huelga y movilización en reclamo de salarios atrasados en Santa Cruz, la CGT Regional de la provincia –de la que formaba parte el SUPE– cuestionó las políticas recesivas de esos años y pidió la defensa de los recursos naturales y la continuidad de las empresas del Estado con asiento en dicha provincia. Estas expresiones daban cuenta de las diferencias dentro de la dirigencia del sindicato, cuyos trabajadores, desde inicios del año 1990, se habían resistido con huelgas a la entrega de áreas exploradas por la empresa estatal, con el apoyo de las seccionales de Mendoza y Neuquén. En realidad, la situación de Santa Cruz era similar a la de otras provincias patagónicas, agrupadas en la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) con el objetivo de unificar los reclamos por las deudas en concepto de regalías mal liquidadas por parte del gobierno nacional (Auzoberría et al., 2005: 2-15).

Contrariamente a los otros estados, fue penetrante el conflicto en el sector petrolero y en el resto de las empresas privatizadas; se inició inmediatamente después de la venta, con ciclos de gran intensi-

²¹ Los años que figuran entre paréntesis indican la fecha del descubrimiento o puesta en explotación del yacimiento y/o área.

dad; intervino ATE e incluso los propios gremios petroleros privados en las acciones y denuncias a la política ejecutada por el menemismo. En el año 2002 se sucedieron los cortes de ruta –desocupados y trabajadores– en las localidades petroleras mencionadas anteriormente, y desde el gobierno local se denunció el involucramiento del gobierno nacional para generar inestabilidad. A través del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, Repsol YPF ofreció puestos de trabajo y la provincia insistió en que se constituyeran cooperativas para realizar obras públicas en el norte provincial (CELS, 2003: 267). A mediados de 2004, para frenar el conflicto social en Pico Truncado y Las Heras, con el argumento desvirtuado de paz social, se sentaron a la mesa de negociación las operadoras petroleras de Repsol YPF y representantes del municipio local, y se firmó lo que se denominó Convenio de Cooperación, por medio del cual el gobierno municipal recibe fondos para pago de subsidios de desempleo, dando lugar a problemas entre los trabajadores de la UOCRA, que ganan casi lo mismo por doce horas de trabajo. Así, la comuna se involucra como garante de la tranquilidad social y se instituye en controladora de los intereses de la actividad extractiva. El conflicto, que presentó una dimensión sociolaboral hasta constituirse en el emergente de una crisis que tuvo un condicionante estructural, desembocó a su vez en una crisis de gobernabilidad, que llevó a la renuncia del gobernador (2006). Los argumentos esgrimidos para la renuncia se refirieron a la cuestión de las obras públicas y a desavenencias entre el gobierno provincial y la Nación.

En el mismo sentido, es necesario reflexionar sobre el cierre de HIPASAM en Río Negro. La mina de hierro, que otrora fuera la más grande de Latinoamérica²², se ubica en un espacio originalmente de asentamientos transitorios de poblaciones nativas. Convertida en empresa estatal en la década del cuarenta, implicó un enclave económico en la zona costera rionegrina. Tras el descubrimiento del hierro en esos años, la localidad desplegó un apogeo económico treinta años después, con la explotación minera por parte de la firma HIPASAM, encabezada por Fabricaciones Militares que abastecía a Somisa²³. La mina de Sierra Grande, que comenzó a producir en 1971, cerró por decreto presidencial en 1992, y dejó a la población en una quimera; en el barrio de los ex mi-

22 Fue la mina subterránea más grande de Latinoamérica, con 414 m de profundidad y 98 km de longitud.

23 El 98% del hierro que se extraía de Sierra Grande era consumido por la planta siderúrgica instalada en San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires): Somisa (1971-1992). Paradójicamente, en el cierre de su campaña electoral por la primera presidencia (1989), Menem promete desde el socavón de la mina la “revolución productiva” (H.M., estudiante de Historia en la Universidad Nacional del Comahue y nativo de Sierra Grande, testimonio oral, junio de 2005).

neros, hoy abandonado, se pergeña construir una cárcel extramuros²⁴. El gobierno rionegrino se hizo cargo de la mina en 1993, con el nombre de Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad Anónima (HIPARSA) y asumió el compromiso de llevar adelante un proceso de privatización; no obstante, administró hasta recientemente la escasa producción. En 1991 fueron despedidos por la empresa²⁵ 52 trabajadores, lo que provocó un corte de ruta por más de cinco días, que contó con el apoyo de la Multisectorial rionegrina. Más de doscientos manifestantes, apostados en la Ruta Nacional 3, la obstruyeron en reclamo de la reincorporación de los despedidos²⁶. En todo ese proceso, tuvieron un papel central las mujeres de los trabajadores en las organizaciones y espacios en donde actuaron, como por ejemplo en la manifestación en la capital de 1991. Esta es apenas la parte visible de un fenómeno mucho más profundo: las nuevas relaciones que se establecen entre la mujer y el territorio que emerge de la reestructuración económica argentina en las últimas décadas. Desde esta perspectiva, es necesario subrayar que las mujeres de los mineros en el caso de Sierra Grande dieron lugar a los primeros piquetes de la década (1991)²⁷.

La escasa población que resistió abandonar el lugar recompuso la actividad económica a través de una forma parcial de explotación turística de las Playas Doradas²⁸; y la mina se destina a un tour para mostrar a los visitantes lo que fue la actividad productiva. Este se denomina “viaje al centro de la tierra” y consiste en un descenso de 70 m, que cada vez tiene menos visitantes a raíz de un accidente. Hoy la población

24 La población actual de la localidad de Sierra Grande es de alrededor de 6 mil habitantes. Antes del cierre, luego de un crecimiento explosivo en los años setenta, la localidad contaba con 16 mil habitantes. Con la paralización de la explotación de la mina a partir de 1992, el lugar sufrió un éxodo poblacional superior al 60%.

25 Hacia 1993, HIPARSA contaba con 40 empleados y un subsidio de 800 mil pesos anuales.

26 La prensa local y la nacional informaron sobre los diferentes cortes que se producían en distintos momentos, sin que se concretara la reincorporación de los trabajadores. Uno de los motivos que impidieron este reconocimiento legal fue que no se resolvieron en la Secretaría de Trabajo los certificados de HIPARSA, lo que condujo a los empleados a denunciar las maniobras de la firma para provocar el despido.

27 En septiembre de 1991, las mujeres de Sierra Grande fueron protagonistas de un corte de ruta que se constituyó en una de las primeras puebladas del país. Los estudiantes secundarios hicieron una sentada en una escuela técnica y los obreros reclamaron en Buenos Aires por la continuidad de su fuente laboral.

28 La villa turística, que se fundó en los años setenta, tuvo un lento desarrollo hasta los noventa, momento en que se integró a la ruta de la costa, desde ese lugar hasta Puerto Madryn, pasando por Las Grutas y otros pequeños balnearios de reciente creación, uniéndose más de 135 km.

de Sierra Grande tiene 9.500 habitantes y, ante la inactividad minera, la reactivación económica pasa por la pesca, el turismo y la administración pública (Díaz y Carreño, 2003). En definitiva, la mina se cerró, no se privatizó; en cuanto a la inversión privada –es necesario tener en cuenta que una mina es inviable sin el subsidio del Estado– sólo aparece en el horizonte un grupo empresario de origen chino (Sinosteell Wenling Pan) que se podría asociar al grupo Minera Sierra Grande A Grade Trading (*Río Negro*, 2006b)²⁹. Un testimonio dice al respecto:

Cuando Somisa se privatiza, no quiere más *pellets* de HIPASAM, porque se podía abastecer con el hierro brasileño que era de mejor calidad. No había posibilidad de exportar nuestro producto. Eso acompañó la decisión nacional de no buscar comprador, sino directamente liquidarla (*Río Negro*, 2005a).

Al momento de redactar el presente trabajo sale el primer embarque con producción de la mina, la última extraída antes de la producción efectiva por parte del nuevo grupo empresario (*Río Negro*, 2006c). En el puerto rionegrino de Punta Colorada fueron cargadas –en el muelle que volvió a funcionar tras diecisiete años de inactividad– en el buque de bandera panameña *Láser*, en sus siete bodegas, 60 mil toneladas de hierro con destino a China.

La particular modalidad de privatización del complejo carbonífero de Río Turbio y el cierre de HIPASAM-Sierra Grande conjugaron la presencia de contextos operativos de privilegio, escaso nivel de inversión, crecientes márgenes de explotación de los trabajadores y una débil y complaciente institucionalidad regulatoria. Conllevaron nulos beneficios públicos, una considerable transferencia de recursos nacionales a manos privadas y una década de estancamiento en el aprovechamiento energético que adoleció de la falta de una política integral que incluyera el carbón (Nahon, 2005: 58-81). Las consecuencias socioeconómicas de la reestructuración y privatización de empresas públicas acicatean a las familias que viven de la actividad minera con similares y diversos comportamientos de reproducción social, que oscilan entre la necesidad de quedarse para la mujer y la de buscar otro lugar para el hombre. En un caso –Río Turbio– los hombres sólo se alejaron para obtener ingresos para el sustento familiar; en el otro –Sierra Grande– las mujeres resistieron con hogares “sobrevivientes” (Federico, 1997: 153-164).

29 En el momento de escribir este trabajo, la prensa local informó sobre la reactivación de la ex HIPASAM, ahora Compañía Minera Sierra Grande, con el objetivo de volver a extraer mineral, hecho que permitió la incorporación de mano de obra local. La compañía Smastell Corporation Wenling Pan se dedica a la extracción y producción de hierro para la fabricación de maquinarias y manufacturas para la construcción.

RECLAMOS Y CONFLICTOS EN NUEVOS Y VIEJOS SECTORES PRODUCTIVOS DENTRO DE LA ACTIVIDAD PRIVADA

Recordemos que la producción industrial tuvo como objetivo la expansión de la industria en determinadas áreas de producción para compensar desequilibrios o desigualdades regionales. En realidad, la promoción industrial operó como un mecanismo que acentuó el proceso de concentración y demostró su vinculación con la desconcentración espacial de la actividad vinculada al uso de los regímenes por parte de las fracciones de capital emergentes. Muchas empresas fueron viables desde la rentabilidad sólo a partir de que se relocalizaron en regiones con altos incentivos fiscales, lo que aumentó la concentración económica. Inicialmente sólo tenían ventajas área limitadas, por ejemplo, Tierra del Fuego y otras provincias; luego se agregaron otras instancias bajo los regímenes especiales. Asimismo, se llevó a cabo una trama de subsidios –a través de las exenciones al impuesto al valor agregado– en estados como Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro, siendo el IVA aproximadamente la mitad del subsidio efectivo por valor agregado (Yanes y Gerber, 1990: 28-42).

En lo que respecta a Chubut, sufrió una importante desaceleración del crecimiento económico en los años ochenta, con incremento de la desocupación, enmarcado en el agotamiento de los regímenes industriales, que impactaron de modo diferencial sobre distintas ciudades de la provincia, en particular en Puerto Madryn y Trelew, y se plasmó en una merma del crecimiento del nivel de producción del sector industrial, vinculado a la actividad textil y a la metalurgia de aluminio³⁰. Después de haber sido una actividad generadora de empleo, la tendencia se debilitó a mediados de esos años, y se hizo visible la crisis hacia fines de la década (Ibarra, 2000: 1-24). A ello se agregó el deterioro de la producción agropecuaria, desplazada por la pesquera como el rubro más importante dentro de las actividades primarias, sosteniendo la actividad económica por su significativa participación en el producto bruto de las ciudades costeras alrededor de Puerto Madryn.

En el caso de Tierra del Fuego, el momento de mayor dinamismo ocupacional se vivió tras la recuperación de la democracia, con 121 industrias y 6.331 empleados, quedando sólo 47 y 3.154 respectivamente en 1996. Esta situación de precariedad laboral motivó la emergencia de acciones colectivas con diversas movilizaciones, protestas, cortes y paros, hasta cobrarse una vida. El sector electrónico ocupó en su mejor

30 Recordemos que Puerto Madryn –puerto de aguas profundas con más de 60 mil habitantes– es la localidad chubutense en la que se encuentra instalada la planta de aluminio Aluar. Desde Trevelin, a 500 km al oeste de Puerto Madryn, se la provee de energía eléctrica a través de la Central Hidroeléctrica de Futaleufú. La empresa exporta el 74% de su producción, mayoritariamente a mercados de América Latina.

momento a 5.132 operarios; luego llegaron las cesantías, los despidos y los cierres masivos de fábricas y la inundación del mercado con productos del exterior sin restricciones. Además de la industria electrónica, se desarrollaron servicios, comercios y administración pública cuyo dinamismo se vinculó a esa actividad ya que la construcción, la madera y la lana son fuentes de trabajo estacionales. En los años noventa estalló en esa provincia un conflicto de los metalúrgicos –nueve plantas frente al Canal de Beagle³¹– por el despido de trabajadores de varias empresas radicadas y el pedido de aumentos salariales motivados en las desventajas –en términos de costos– de residir en esa área (la provincia es tres veces más cara que cualquier otro lugar de la Patagonia). Las huelgas tuvieron el apoyo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y de otros gremios y sindicatos como la CTA, con piquetes frente a las fábricas –sin ocupación de las mismas– y movilizaciones de toda la población fueguina. Los docentes, los trabajadores del gremio de la construcción, portuarios y comercio fueron los más importantes en las movilizaciones de esos años, que provocaron una fuerte tensión social, que preocupó al gobierno nacional –quien acusó a los obreros en huelga de “agitadores profesionales”– y a las autoridades locales como al entonces gobernador perteneciente al Movimiento Popular Fueguino (MPF) y al intendente de Río Grande (radical). Las movilizaciones tuvieron el apoyo de prestigiosas figuras del cine y de la política nacional como Pino Solanas, Patricio Echegaray y Enrique Mathov. Luego de casi veinte días de conflicto se llegó a un arreglo que no fue duradero, pues el problema se reinició (en agosto de 1994) a partir de una serie de sucesos en algunas fábricas y se instaló el tema de la concentración³². Despidos, cierres de plantas, tomas pacíficas, marcha y movilizaciones caracterizaron el clima de extrema tensión a comienzos de 1995 en la isla, con la presencia y la represión de tropas de la Gendarmería, que provocó la muerte de Víctor Choque, un joven obrero salteño de la construcción –junto con una treintena de heridos–, como consecuencia de un balazo en la cabeza, en medio de una manifestación que reclamaba frente a la jefatura de la policía provincial la libertad de los trabajadores detenidos días antes. Se trata del primer ciudadano muerto en una protesta social desde la instalación de la democracia en Argentina, lo que marca una suerte de continuidad con un acontecimiento de proporciones analógi-

31 Las nueve plantas de Ushuaia pertenecen a cinco empresas. Entre las más importantes, cabe mencionar a Kenia Río Grande, Philips, JVC, Foxman, Vinisa, Sanyo, Philco, Noblex, Hitachi y Aurora.

32 Bajo la promoción industrial (Ley 19640), se instalaron cerca de 150 empresas entre Ushuaia y Río Grande, que llegaron a triplicar la población de la isla entre 1976 y 1988. Hacia 1994, quedaron aproximadamente 40 empresas.

cas, como el asesinato de un joven manifestante en Buenos Aires el 31 de marzo de 1982³³.

Desde 1996 hasta finalizar su mandato, la inestabilidad política del gobierno de la provincia se relacionó con causas enmarcadas en el incumplimiento de los deberes públicos e irregularidades financieras, que provocaron el despido de trabajadores de los PT, pagos de los sueldos estatales en cuotas, cierre de instituciones de acción social y una reducción significativa de los gastos administrativos. Entre noviembre y diciembre de 1999, se produjo un conjunto de protestas en contra del proyecto que envió el gobernador fueguino a la Legislatura, que proponía el recorte del 60% del adicional remunerativo por zona desfavorable a los trabajadores de la administración central y establecía un régimen de jubilaciones anticipadas. La Intendencia local y la Legislatura provincial fueron los puntos de unicidad de la marcha pacífica. Por una parte, el decreto firmado por el gobierno que establecía una reducción del 30% provocó también una marcha, pero con menos participación que lo calculado por los gremios organizadores, no obstante obtener el apoyo de la UOM. Por otro, durante 2005, los obreros metalúrgicos de las fábricas electrónicas, convocados por la UOM, adhirieron a un paro general por 24 horas y reclamaron la reincorporación de los contratados que habían quedado sin trabajo, además de un aumento salarial del 30%.

Luego de 2001, con el ciclo ascendente de la protesta social a nivel nacional, la Legislatura provincial sancionó, dos años después, una ley de expropiación de las dos fábricas de la empresa Aurora-Grundig (Renacer) que había cerrado sus puertas en 1998, y otorgó a los trabajadores la posibilidad de constituirse en cooperativa –experiencia de colectivo obrero con ciertas similitudes a la desarrollada por los trabajadores de la ex Zanón, fábrica sin patrones, “bajo control obrero” (FaSinPat). Mientras esta ley es el primer antecedente provincial de expropiación de una fábrica, los obreros y obreras ceramistas neuquinos y su sindicato siguen esperando “que los legisladores provinciales le den tratamiento al proyecto de ley presentado en la Legislatura” (Comunicado de Prensa Ceramista, 2006). En 2004, la fábrica hizo entrega al gobierno fueguino de electrodomésticos para viviendas populares y llevó a los obreros y obreras de la Comisión de Lucha a sostener un discurso legitimante y optimista, vinculado a que pudieron romper el esquema fordista de los salarios. Mientras tanto, en Río Grande, trabajadores estatales de ATE y militantes radicales se manifestaron contra el gobernador –radical, ahora kirchnerista– quien adjudicó la responsabilidad de planificar las

33 En los orígenes de los piquetes hubo una serie de muertes: Teresa Rodríguez en Cutral Co (Neuquén, 1996); Aníbal Verón en Tartagal (Salta, 2000); Carlos Santillán y José Barrios en Mosconi (Salta, 2001).

acciones colectivas a los intendentes de Río Grande y Ushuaia, ambos de su partido.

En 1994, la provincia fue escenario de una prolongada lucha gremial de los trabajadores metalúrgicos por la pérdida de sus fuentes laborales, situación que se apaciguó con la gestión del obispo de Santa Cruz. Las responsabilidades cruzadas entre el gobernador y la justicia llevaron a los gremios a pedir la renuncia del gobernador –acorralado por la crisis y con la imposibilidad de que la Legislatura aprobara el ajuste provincial–, momento de tensión que disminuyó con la asunción del nuevo gobernador y el inicio de negociaciones con los distintos sectores.

UNA ACTIVIDAD RELATIVAMENTE NUEVA EN LA ECONOMÍA DE LAS PROVINCIAS COSTERAS: LA PESCA EL CASO DE LA PESCA

Otro recurso que tuvo un significativo impulso y convocó al conflicto fue la pesca. El crecimiento de la actividad desde fines de la década del setenta aumentó en los noventa con las empresas radicadas en Chubut, que solicitaron licencias para practicarla, lo que activó un convenio de reciprocidad, y se sumaron a las veinte compañías que desde 1990 operaron en la costa santacruceña. En cuanto a la pesca de altura, esta evolucionó de un modo interesante en la década del ochenta, y dinamizó a Puerto Deseado demandando servicios y personal técnico especializado. A lo largo de estos años, la participación de compañías subsidiarias de extranjeras aumentó y aumenta, como así también la constitución de empresas mixtas integradas por capital argentino y extranjero, tendencia que se profundizó notablemente después de los noventa. Es decir que, desde esos años, se inauguró un momento que da cuenta del cambio productivo provincial tras la crisis del carbón y la ganadería, pero ligado a la actividad pesquera, que contrariamente a las anteriores es básicamente de capital privado (Pellanda y Fernández, 2000: 932-979). Recordemos que en los años cincuenta, con las políticas desarrollistas y el proyecto de explotar y desarrollar la pesca comercial en la costa patagónica, se construyó un puerto de aguas profundas: San Antonio Este (SAE), en Río Negro, que ofrecía ventajas impositivas para las sociedades interesadas en establecerse en la región, que implicaron el desarrollo industrial con radicación de capitales nacionales (Galme, Pesquera Saic) y más tarde extranjeros, cuya producción se comercializa en el mercado interno y en centros europeos como España e Italia.

Actualmente existe la Cámara Argentina-Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIC) y la Federación de los Trabajadores de la Industria de Alimentos (FTIA). La primera estaba cercana al acuerdo en los conflictos con los grupos empresariales, y la segunda apuntaba a lograr en la lucha por los incrementos salariales la homologación con

el sindicato que obtuviera la mejor negociación. Entre el 20 de abril y fines de mayo de 2005, se desarrolló una disputa en el sector a partir de la movilización organizada por los trabajadores de Puerto Madryn, quienes convocaron a acciones de protesta impidiendo el ingreso de insumos para las empresas productoras –mayoritariamente de capital extranjero– con piquetes en la Ruta Nacional 3 y en las 1 y 4 provinciales, cerrando de esta manera la ciudad. Con el apoyo de la sociedad local, los protagonistas denominaron a esta acción como el segundo *Madrinazo*³⁴. Con la pretensión de regionalizar el conflicto, los fileteros chubutenses se concentraron con gomas encendidas frente a la planta Alpescas (SAO) y otro grupo de piquetes se dirigió a la planta pesquera Tamar SA de Sierra Grande, con la intención de obtener una negociación de un salario mínimo como el logrado por los trabajadores pesqueros de Comodoro Rivadavia (*Río Negro*, 2005b). El conflicto no se resolvió rápida y satisfactoriamente por la intransigencia de todas las partes. En octubre de 2005, nuevamente se paralizó –por más de tres meses en algunos puertos– la industria pesquera en Puerto Deseado, Chubut, Ushuaia y Mar del Plata; los sindicatos reclamaban la vigencia de la Resolución 254/05 que ataría sus salarios al dólar, cuestión aún sin resolver.

LA MATRIZ PRODUCTIVA DEL ALTO VALLE DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN: LA FRUTICULTURA

Por último, es necesario realizar algunas consideraciones sobre la situación de la fruticultura, recurso fundamental del Alto Valle de Río Negro y Neuquén durante décadas, y los conflictos reeditados por los productores, los *tractorazos*, a partir de los años noventa. Hacia mediados de esa década, producto de la resolución del conflicto con los estatales rionegrinos, se mostró (y muestra) con claridad el nexo entre el poder económico y político rionegrino –no así el caso del neuquino– cuando el gobernador electo (1995) acordó, con el apoyo del gobierno nacional, la concesión del puerto de SAE a la más importante exportadora de fruta: Expofrut³⁵. Esta empresa, originalmente constituida por capitales regionales, pasó mayoritariamente a capital extranjero (de origen italiano). El grupo, transformado en sociedad anónima, tiene su

34 Estas acciones colectivas lograron una repercusión local y nacional que no se daba desde 1984, cuando el pueblo madryense se dirigió al puerto para repudiar la presencia de naves norteamericanas, acontecimiento conocido como el *Madrinazo*.

35 Si bien la devaluación de la moneda argentina permite la recuperación de dos empresas importantes del valle como son Tres Ases y Moño Azul, la empresa Expofrut es la más importante, con 5 mil ha en el Alto Valle de Río Negro, además de contar con galpones, insumos y apoyo financiero.

centro en el país europeo y un directorio local. Frente a esta concentración de capitales en el principal rubro del valle rionegrino, los pequeños y medianos productores, con unidades de producción de entre 10 y 15 ha, quedaron desamparados, no sólo porque no había política del Estado provincial orientada a otorgar subsidios, sino porque no podían competir ni hacer frente a las consecuencias de las nuevas orientaciones que conducen a la concentración de capital (Salinas, 2006: 8). Por una parte, los efectos de ciclos de la fruticultura, el salario de los trabajadores, los problemas del transporte y de la venta hoy están totalmente supeditados a las situaciones del mercado y, sobre todo, a la imposibilidad financiera de ingresar tecnología adecuada para las nuevas condiciones de la oferta y la demanda. El productor es el único dentro del rubro que no tiene paritaria y que, en el contexto de las políticas de los años noventa, protesta contra el Estado local y nacional a través de los *tractorazos*, siendo el primero en el nuevo ciclo ascendente de la protesta (1993) que finalizó con el procesamiento de tres actores que la lideraron (luego en 1995 y 1999, momento en el que aparece el Movimiento de Mujeres en Lucha). En general, las protestas de los productores terminan judicializadas y direccionadas por el propio gobierno local³⁶ y atadas a subsidios de la Nación que llegaron retaceados (C.C., productor del Alto Valle, testimonio oral, junio de 2005).

En enero de 2006, volvieron los tractores a la ruta y a las calles; la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén (integrada por dieciséis cámaras) realizó una protesta en busca de mejores precios para la venta de peras y manzanas. La modalidad consistió en el bloqueo del paso a todos los camiones que transportaban frutas al puerto de San Antonio Oeste (SAO, Río Negro), liberando los transportes interurbanos. La decisión de los productores sumó complejidad al escenario frutícola que mantenía un conflicto paralelo entre los empresarios nucleados en la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI) y la intersectorial conformada por los gremios Unión de Trabajadores Rurales (UATRE), Camioneros (UTA) y Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y Manufacturas de la República Argentina (STIHMPPRA), quienes plantearon las protestas por carriles diferenciados; por ejemplo, los empresarios luchaban por la disminución de retenciones (del 10 al 5%). La estrategia de movilización consistió no sólo en cortar el acceso al puerto, sino la salida de los galpones y los caminos entre las chacras. El levantamiento de la mayoría de los piquetes llegó con un principio de acuerdo entre los sectores en conflicto y el gobierno provincial, que ofició de mediador en

36 Las empresas incrementaron sus ganancias en un 260% (en 2001-2005). Se trató de la protesta de los productores de 1999, al frente de la cual se colocó el mismo gobernador Pablo Verani.

la denominada “mesa frutícola”. Después de varias reuniones, la mesa logró un entendimiento con la Federación de Productores y la CAFI con el gobernador rionegrino, y se obtuvieron 2 centavos de dólar por kilo para la manzana y 14 centavos para la pera y un subsidio del gobierno nacional de 8 millones de pesos.

REFLEXIONES FINALES

En las provincias de la Patagonia argentina se produjo un verdadero paisaje de insurgencia colectiva, cuando se profundizó el desempleo a partir de la política de ajuste fiscal, reforma del Estado y privatizaciones de los años noventa. Los trabajadores y ex trabajadores jugaron un papel central, aparecieron sujetos y movimientos de resistencia –nuevos y viejos convivieron y se complementaron– contra los efectos de esa política.

Los medios utilizados por los patagónicos dentro del repertorio de estrategias no sufrieron grandes mutaciones; antes bien, las *rutas nacionales* que comunican entre sí los territorios del sur argentino y con el área metropolitana significaron y significan para los actores sociales de la región el escenario de protesta social por excelencia –desde la década del setenta– dado que, por una parte, el corte paraliza, retiene los flujos de intercambio de mercaderías y bienes y, por otra, provoca perjuicios al importante flujo turístico nacional e internacional. El *corte de ruta* como modalidad de acción colectiva se nacionalizó en los noventa, cuando los comunicadores de los medios nacionales lo instalaron en el escenario central. En otras palabras, la *ruta* ha sido un bien simbólico aglutinante, por más de medio siglo, del imaginario colectivo.

En el marco de los cambios macroestructurales de la actual fase del capitalismo y del poder coercitivo del Estado, en la dimensión local se afectaron intereses y oportunidades políticas que dieron forma a las acciones colectivas de desocupados, trabajadores y gente común, organizándose en defensa de los valores compartidos a lo largo del espacio patagónico, con resultados diversos. Según las oportunidades políticas, en algunos procesos la acción colectiva insurgente desembocó en la pérdida de las elecciones a intendente del partido hegemónico (Cutral Co, Neuquén, 1997), situación amarrada por el interjuego del faccionismo de los sectores dirigentes; en otros contextos, las protestas conllevaron la renuncia del gobernador y el juicio político, como en Santa Cruz (2006) y Chubut (1990). Finalmente, el distanciamiento de la forma de negociación con la instancia central de la gestión saliente del partido dominante –como es el caso del recambio de gobernador en Río Negro (1995)– fue la modalidad utilizada para recuperar la gobernabilidad y evitar la intervención nacional. Al margen de esta caracterización se encuentra la isla de Tierra del Fuego, que en los años de referencia transita la etapa de construcción de las nuevas instituciones estatales.

En el espacio de estudio, y atendiendo a las especificidades locales, irrumpe lo diverso de los sistemas políticos y de las culturas provinciales, y se observan continuidades con las prácticas rutinarias del clientelismo que permitieron la obtención de logros materiales para algunos manifestantes y operaron en las diferencias de los conflictos. En este sentido, el clientelismo tuvo (y tiene) para la mayoría de los habitantes patagónicos –por ser sociedades de “construcción estatal”– una imagen social de que no existe algo o alguien distinto en la política, que no sea el Estado, para resolver las necesidades de las personas. Por ello, la salida a la ruta terminó siendo la metodología de acción de las organizaciones emergentes frente a los problemas, que confrontan fuera del sistema político debido a su oclusión, porque esa metodología no sólo decide sobre las cuestiones cotidianas de los más pauperizados, sino que también les genera un cierto empoderamiento individual y nuevos liderazgos.

En definitiva, la protesta en los estados patagónicos no se reestructura o potencia en el *ciclo ascendente* –caracterizado por las asambleas barriales y *cacerolazos* iniciados en diciembre de 2001 en determinadas áreas del país–, lo que impide realizar generalizaciones y establecer regularidades en la nueva fase de la beligerancia en Argentina. El sentido y las formas de la protesta conservan no sólo la huelga como modalidad de lucha, sino que el actor convocante de la protesta continúa siendo el gremio, el sindicato y será uno u otro según cada situación específica (UOCRA, UOM, CTA, ATE, UPCN, CAFI). Por lo tanto, en la insurgencia actual, se complejizan los significados de la lucha, de las rutinas aprendidas y de los comportamientos ejercidos mediante un proceso de selección, que dan cuenta del repertorio político-cultural de las acciones colectivas de los sujetos sociales patagónicos en las últimas décadas.

BIBLIOGRAFÍA

- Alfani, Mario; Alonso, Osvaldo y Welschinger, Daniel 2000 “Política educativa entre la crisis y el ajuste fiscal. El caso de la provincia de Río Negro, Argentina, 1991-1999” en <www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p5.1/htm>.
- Aiziczon, Fernando 2005 “Neuquén como campo de protesta” en Favaro, Orietta e Ivorno Graciela *Sujetos sociales y política. Historia reciente de la norpatagonia argentina* (Buenos Aires: La Colmena).
- Alonso, Osvaldo 2001 “Gobernabilidad, democracia y educación. Una aproximación al caso rionegrino” en *Pilquen* (Viedma: Curza/UNCO) N° 4.

- Auzoberría, Miguel; Huenul, Hugo et al. 2005 “La huelga de los estatales del año 1990 en Santa Cruz. Crisis de una estructura económico-social”, X Jornadas Interescuelas/Departamento de Historia. Universidad de Rosario, Rosario, 20 de septiembre, mimeo.
- Bona, Aixa 2000 “Actividades económicas de Santa Cruz (1940-1990)” en García, Alicia y Masón, Elizabeth (ed) *El gran libro de Santa Cruz* (Buenos Aires: Alfa) Tomo 2
- Carrario, Marta y Campos, S. 1996 “A 10 años del conflicto obrero en la represa de Piedra del Águila” en *Revista Calf* (Neuquén: CALF) N° 198.
- CELS 2003 *El Estado frente a la protesta social, 1996-2002* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Cicciari, María Rosa 1997 “Caracterización de la dinámica económica de la ‘Cuenca del Golfo San Jorge’ en los años 90” en Salvia, Agustín y Panaia, Marta (comps.) *La Patagonia privatizada* (Buenos Aires: CEA/CBC) N° 14.
- Díaz, Alejandra y Carreño, Nadine 2003 “La sierra y su mina de hierro” en *La Barda*, Gral. Roca, en <www.labardarevista.com.ar>.
- Díaz Honorio, Alberto 1989 *El traslado de la capital: historia para el debate* (Buenos Aires: CEAL) N° 249.
- El Oeste* 1990 (Chubut) 18 de octubre.
- Escandell, Stella 1997 “Viabilidad del federalismo en contextos de ajuste: el caso argentino” en Oszlak, Oscar (comp.) *Estado y sociedad: las nuevas reglas del juego* (Buenos Aires: CEA/CBC) N° 18.
- Farinetti, Marina 2003 “La conflictividad social después del movimiento obrero” en *Nueva Sociedad* (Caracas: Nueva Sociedad) N° 182.
- Farinetti, Marina 2005 “Violencia y risa contra la política en el santiagueño: indagación sobre el significado de una rebelión popular” Schuster, Federico; Naishtat, Francisco et al. (comps.) *Tomar la palabra* (Buenos Aires: Prometeo).
- Favaro, Orietta e Iuorno, Graciela 2005 *Sujetos sociales y política. Historia reciente de la norpatagonia argentina* (Buenos Aires: La Colmena).
- Favaro, Orietta; Iuorno, Graciela et al. 1997 “La conflictividad social en Neuquén. El movimiento cutralquense y los nuevos sujetos sociales” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 148.

- Favaro, Orietta; Iuorno, Graciela et al. 2000 “Estrategias del Estado neuquino en el escenario de la globalización. Propuestas para la reconversión económica de un espacio mediterráneo” en *Eure. Revista latinoamericana de estudios urbanos regionales* (Santiago de Chile: Instituto de Estudios Urbanos-Pontificia Universidad Católica de Chile) N° 78.
- Federico, Andrea 1997 “Comportamientos familiares de reproducción social en Río Turbio” en Salvia, Agustín y Panaia, Marta (comps.) *La Patagonia privatizada* (Buenos Aires: CEA/CBC) N° 14.
- Gambina, Julio y Campione, Daniel 2002 *Los años de Menem. Cirugía mayor* (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación).
- Gatti, Daniel Osvaldo 2003 *Kirchner, el amo del feudo* (Buenos Aires: CARYBE).
- Gómez, Daniel 1995 “Así no empezamos” en *La escuela en marcha* (Viedma: CTA/UNTER/CTERA) N° 5.
- Hopstein, Graciela 2004 “Piqueteros: dilemas e potencialidades de un movimiento que emergió apesar do Estado e à margem do mercado” en *Mutitudes*, N° 14.
- Ibarra, Horacio 2000 “Estado, economía y sociedad. Trelew y su *hinterland*, 1889-1999”. Trabajo presentado a la Secretaría de Investigación de la UNPSJB, Trelew, 15 de noviembre, mimeo.
- Kantor, Damián 2004 “Definiendo un camino para la economía del fin del mundo” en *Clarín* (Buenos Aires) en <www.clarin.com/suplementos/economicos/2004>.
- Klachko, Paula 2005 “Las consecuencias políticas y sociales de la privatización de YPF. El impacto en las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 209.
- Landriscini, Graciela 2004 “Vaivenes de la economía y el Estado rionegrino en las décadas democráticas de fin del siglo XX. Crisis financiera y conflictos sociales” en Rafart, Gabriel; Quintar, Juan et al. (comps.) *20 años de democracia en Río Negro y Neuquén* (Neuquén: Educo-Reun).
- Lizárraga, Fernando 2006 “Los maestros siguen dando cátedra” en *8300* (Neuquén) N° 10.
- Lobato, Mirta y Suriano, Juan 2003 *La protesta social en la Argentina* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica).

- Luque, Élide; Martínez, Susana et al. 2003 “Conflictos sociales en la provincia de Santa Cruz. Los años noventa” en *PIMSA* (Buenos Aires: PIMSA).
- Márquez, Daniel 1997 “Crisis ocupacional y programas para la generación de empleo: algunos indicadores para el análisis de Comodoro Rivadavia, 1990-1995” en Salvia, Agustín y Panaia, Marta (comps.) *La Patagonia privatizada* (Buenos Aires: CEA/CBC) N° 14.
- Nahon, Carolina 2005 “La privatización de Yacimientos Carboníferos Fiscales: ¿negocios privados, subsidios y (des)control público?” en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 209.
- Novaro, Marcos y Palermo, Vicente 2003 *La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática* (Buenos Aires: Paidós) N° 9.
- Oszlak, Oscar 1984 “Proceso”, *crisis y transición democrática* (Buenos Aires: CEAL) N° 45 y 59.
- Oviedo, Luis 2005 *Prensa obrera* (Buenos Aires) N° 897.
- Pellanda, Luis y Fernández, Patricio 2000 “Los recursos pesqueros continentales” en García, Alicia y Masón, Elizabeth (eds.) *El gran libro de la provincia de Santa Cruz* (Madrid: Alfa-Milenio) Tomo 2.
- Petrucelli, Ariel 2005 *Docentes y piqueteros. De la huelga de Aten a la pueblada de Cutral Co* (Buenos Aires: El Fracaso/El Cielo por Asalto).
- Río Negro* 1995 (General Roca) 4 de octubre.
- Río Negro* 1999 (General Roca) 17-22 de diciembre.
- Río Negro* 2003 (General Roca) 7 de marzo.
- Río Negro* 2005a (General Roca) 26 de abril.
- Río Negro* 2005b (General Roca) 7 de mayo.
- Río Negro* 2006a (General Roca) 7 de enero.
- Río Negro* 2006b (General Roca) 25 de febrero.
- Río Negro* 2006c (General Roca) 31 de marzo.
- Rofman, Alejandro 1999 *Las economías regionales a fines del siglo XX* (Buenos Aires: Ariel).
- Salinas, Silvina 2006 “Se confirma la fuerte concentración de la actividad” en *Río Negro* (General Roca).

- Schuster, Federico; Naishtat, Francisco et al. (comps.) 2005 *Tomar la palabra* (Buenos Aires: Prometeo).
- Secretaría de Comercio e Industria de la Pequeña y Mediana Empresa 2005 “Parques Industriales: planificación estratégica de la producción”, en <www.emprendedor XXI.coop/pdf/parquesindustriales.pdf>.
- Sidicaro, Ricardo 2004 “Coaliciones golpistas y dictaduras militares: el ‘proceso’ en perspectiva comparada” en Pucciarelli, Alfredo (coord.) *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura* (Buenos Aires: Siglo XXI).
- Sidicaro, Ricardo 2005 *La crisis del Estado y los actores políticos y económicos en la Argentina (1989-2001)* (Buenos Aires: Eudeba/ Libros del Rojas) N° 1.
- Svampa, Maristella 2006 “Introducción: la declinación del ingreso ciudadano: algunas variantes de una discusión incipiente” en *El Rodaballo* (Buenos Aires) N° 16.
- Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián 2003 *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras* (Buenos Aires: Biblos).
- Villca, Hugo 2004 “Crónica de una muerte anunciada. El colapso del modelo de estatalidad providencialista en Río Negro” en Rafart, Gabriel; Quintar, Juan et al. (comps.) *20 años de democracia en Río Negro y Neuquén* (Neuquén: Educo-Reun).
- Von Storch, María Victoria 2002 “El impacto social de la privatización de YPF en Comodoro Rivadavia” en *Estudios del Trabajo* (Buenos Aires: ASET) N° 24.
- Yanes, Luis y Gerber, Marcos 1990 *Crisis de acumulación, regulación estatal y valorización del espacio en Argentina* (Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires).